

**CUERPO DE INGENIEROS
INDUSTRIALES DEL ESTADO**

**Preparación del Colegio Oficial
de Ingenieros Industriales (COIIM)**



Simulacro 04

TEST



**INGENIEROS
INDUSTRIALES**

<https://formacion-oposiciones-ingenieros.es>

SIMULACRO EXAMEN 04

CUERPO INGENIEROS INDUSTRIALES DEL ESTADO

14 de abril de 2026 · CON RESPUESTAS Y JUSTIFICACIONES

Pregunta 1

¿Cuál de los siguientes elementos constituye un requisito imprescindible para que exista responsabilidad patrimonial de la Administración?

- A. La existencia de dolo por parte del funcionario responsable.
- B. La existencia de una lesión efectiva, evaluable económicamente e individualizada. ✓**
- C. La existencia de una sentencia judicial firme previa.
- D. La existencia de una infracción administrativa grave.

Respuesta correcta: Opción B

Justificación:

La responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas constituye uno de los pilares del sistema de garantías del Estado de Derecho. Su fundamento constitucional se encuentra en el artículo 106.2 de la Constitución Española, que establece el derecho de los particulares a ser indemnizados por toda lesión que sufran en sus bienes y derechos como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos. Este principio se desarrolla actualmente en los artículos 32 a 37 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, que configuran un sistema de responsabilidad objetiva en el que no es necesario acreditar dolo o culpa por parte de la Administración. Dentro de este régimen, la doctrina y la jurisprudencia han identificado tres requisitos esenciales para que exista responsabilidad patrimonial: la existencia de una lesión indemnizable, la imputación del daño a la Administración y la existencia de una relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y el daño producido.

La respuesta correcta es la opción b) porque la ley establece expresamente que el daño debe ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado en relación con una persona o grupo de personas. Estos tres requisitos aparecen recogidos en el artículo 32.2 de la Ley 40/2015. La lesión debe ser real y concreta, no meramente hipotética, y debe poder traducirse en una valoración económica que permita calcular la indemnización correspondiente. Además, debe afectar de forma específica a una persona o grupo de personas, evitando que el sistema de responsabilidad se utilice para reclamar daños genéricos o colectivos. La exigencia de estos requisitos cumple una función fundamental dentro del sistema de responsabilidad patrimonial, ya que permite delimitar los supuestos en los que procede la indemnización y evitar reclamaciones infundadas contra la Administración. De este modo se garantiza un equilibrio entre la protección de los derechos de los ciudadanos y la estabilidad financiera de las Administraciones Públicas.

Pregunta 2

¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente el concepto de daño antijurídico en la responsabilidad patrimonial administrativa?

- A. El daño producido por una actuación ilegal de la Administración.
- B. El daño que el particular no tiene el deber jurídico de soportar. ✓**
- C. El daño causado por funcionarios que actúan con negligencia grave.
- D. El daño causado exclusivamente por actos administrativos anulados judicialmente.

Respuesta correcta: Opción B

Justificación:

El concepto de daño antijurídico constituye uno de los elementos esenciales del sistema de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas. Este concepto se encuentra implícitamente recogido en el artículo 106.2 de la Constitución Española y se desarrolla en el artículo 32 de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público. Según esta normativa, los particulares tienen derecho a ser indemnizados por las lesiones que sufran en sus bienes y derechos como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos, siempre que dichas lesiones no tengan el deber jurídico de soportarlas. Desde el punto de vista doctrinal, el daño antijurídico no se identifica necesariamente con la ilegalidad de la actuación administrativa. En realidad, el sistema español admite la responsabilidad incluso cuando el funcionamiento del servicio público ha sido normal o conforme a Derecho, siempre que el ciudadano haya sufrido un perjuicio singular que no está obligado a soportar.

La respuesta correcta es la opción b) porque el daño antijurídico se define precisamente como aquel perjuicio que el ciudadano no tiene el deber jurídico de soportar. Este criterio ha sido desarrollado ampliamente por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que ha señalado que el daño antijurídico constituye el elemento central del sistema de responsabilidad patrimonial. La existencia de este concepto cumple una función esencial dentro del sistema de responsabilidad administrativa, ya que permite distinguir entre los perjuicios que deben ser indemnizados por la Administración y aquellos que forman parte de las cargas generales que los ciudadanos deben soportar en una sociedad organizada.

Pregunta 3

En relación con la responsabilidad patrimonial del Estado legislador, ¿cuál de los siguientes supuestos puede generar derecho a indemnización?

- A. La aprobación de cualquier ley que perjudique a un ciudadano.
- B. La aprobación de una ley declarada inconstitucional. ✓**
- C. La aprobación de cualquier reglamento administrativo.
- D. La aprobación de una ley que genere efectos económicos negativos para una empresa.

Respuesta correcta: Opción B

Justificación:

La responsabilidad patrimonial del Estado legislador constituye una manifestación particular del régimen general de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas. Este supuesto se regula en el artículo 32 de la Ley 40/2015 y responde a la necesidad de garantizar que los ciudadanos puedan ser indemnizados cuando los daños sufridos se deriven directamente de la actividad legislativa del Estado. Tradicionalmente, el principio de inmunidad del legislador impedía reclamar por daños derivados de la ley, pero la evolución del Derecho Constitucional y del Derecho de la Unión Europea ha llevado al reconocimiento de determinados supuestos de responsabilidad.

La respuesta correcta es la opción b) porque uno de los supuestos expresamente previstos por la ley es el de los daños derivados de la aplicación de una norma con rango de ley declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional. En estos casos, el artículo 32.4 de la Ley 40/2015 establece que los particulares podrán ser indemnizados siempre que hayan obtenido una sentencia firme desestimatoria en un recurso contra la actuación administrativa que causó el daño y que hayan alegado la inconstitucionalidad posteriormente declarada. Este régimen pretende evitar que la declaración de inconstitucionalidad genere automáticamente una responsabilidad ilimitada del Estado. La regulación de la responsabilidad del Estado legislador refleja la creciente importancia del control de constitucionalidad y del principio de supremacía del Derecho de la Unión Europea, garantizando que los ciudadanos no soporten daños derivados de normas contrarias al ordenamiento jurídico superior.

Pregunta 4

¿Qué institución de la Unión Europea tiene como misión garantizar el respeto del Derecho en la interpretación y aplicación de los tratados?

- A. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ✓**
- B. El Tribunal de Cuentas Europeo
- C. El Banco Central Europeo
- D. El Consejo Europeo

Respuesta correcta: Opción A

Justificación:

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea constituye una de las instituciones fundamentales del sistema institucional europeo. Su regulación se encuentra en el artículo 19 del Tratado de la Unión Europea. Esta institución tiene como misión garantizar que el Derecho de la Unión se interprete y aplique de manera uniforme en todos los Estados miembros. La respuesta correcta es la opción a) porque el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es el órgano jurisdiccional encargado de asegurar el respeto del Derecho en la interpretación y aplicación de los tratados. Para ello ejerce diversas competencias jurisdiccionales, entre las que destacan el procedimiento prejudicial, los recursos por incumplimiento y los recursos de anulación. La actividad del Tribunal de Justicia es esencial para la coherencia del sistema jurídico europeo. Gracias a su jurisprudencia se han desarrollado principios fundamentales del Derecho de la Unión, como el principio de primacía, el principio de efecto directo o el principio de responsabilidad del Estado por incumplimiento del Derecho europeo.

Pregunta 5

Respecto al anormal funcionamiento de la Administración de Justicia:

- A. Engloba aquellas anomalías que, no siendo constitutivas de error judicial, se deben a un funcionamiento normal de la Administración de Justicia.
- B. Exige dolo o culpa.
- C. Puede contemplar el funcionamiento normal en casos de fuerza mayor.
- D. El interesado dirigirá su petición indemnizatoria directamente al Ministerio de Justicia. ✓**

Respuesta correcta: Opción D

Justificación:

Además del error judicial, el ordenamiento jurídico reconoce otro supuesto de responsabilidad patrimonial del Estado juez: el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia. Este concepto incluye aquellas irregularidades que, sin constituir un error judicial propiamente dicho, provocan un daño antijurídico al ciudadano.

La respuesta correcta es la opción d) porque la normativa establece que la solicitud de indemnización por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia debe dirigirse directamente al Ministerio de Justicia. Este órgano tramitará la reclamación conforme al procedimiento de responsabilidad patrimonial previsto en la legislación administrativa.

Este sistema permite articular un mecanismo de reparación frente a disfunciones estructurales o administrativas del sistema judicial, como retrasos injustificados, pérdida de documentos o irregularidades en la tramitación procesal. De esta forma se protege el derecho de los ciudadanos a una justicia eficaz.

Pregunta 6

El informe con el resultado del presupuesto del año anterior se remite a las Cortes, ¿dentro de qué serie del Proyecto de Ley de los PGE?

- A. Serie Roja
- B. Serie Gris ✓**
- C. Serie Azul
- D. Serie Naranja

Respuesta correcta: Opción B

Justificación:

La documentación de los Presupuestos Generales del Estado se estructura en varias series (roja, verde, amarilla y gris), conforme a la práctica presupuestaria española recogida en la Ley General Presupuestaria. Cada serie cumple una función específica dentro del conjunto documental que acompaña al proyecto de ley. La respuesta correcta es la b) Serie Gris, ya que incluye información complementaria, entre la que se encuentra la liquidación del presupuesto del ejercicio anterior y el avance del actual. Las demás opciones son incorrectas: la serie roja contiene la ley y estados básicos, la azul es divulgativa y la naranja no existe como categoría formal. La consecuencia es que el Parlamento dispone de información completa sobre la ejecución presupuestaria pasada, lo que refuerza el control parlamentario y la transparencia. Este mecanismo permite evaluar la eficacia del gasto público y fundamentar decisiones presupuestarias futuras.

Pregunta 7

El artículo 80.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece una regla general sobre la naturaleza de los informes en el procedimiento administrativo. Salvo disposición expresa en contrario, ¿cuál es el régimen que dicho precepto atribuye con carácter general a los informes?

- A. Facultativos y vinculantes.
- B. Obligatorios y vinculantes.
- C. Facultativos y no vinculantes. ✓**
- D. Ni facultativos ni vinculantes.

Respuesta correcta: Opción C

Justificación:

El artículo 80.1 de la Ley 39/2015 establece literalmente: "Salvo disposición expresa en contrario, los informes serán facultativos y no vinculantes." Esto significa que la regla general opera en un doble eje independiente: en cuanto a su necesidad en el procedimiento (preceptivo vs. facultativo) y en cuanto a su eficacia jurídica (vinculante vs. no vinculante). Ambas dimensiones son, por defecto, las más débiles —facultativo y no vinculante— y solo una disposición expresa puede alterar una, la otra o ambas simultáneamente.

Respecto de los informes vinculantes, la Administración está obligada a resolver del modo en que le indica el órgano consultivo; mientras que los informes no vinculantes, aunque no obligan como tal, sí establecen la obligación de justificar aquellos aspectos en los que la Administración se aparte del informe emitido. Esto conecta con el artículo 35.1.c) de la misma Ley, que exige motivar los actos que se separen del criterio de órganos consultivos.

Las opciones A y B son incorrectas porque invierten el régimen general (hacen obligatorios u preceptivos lo que por defecto es facultativo). La opción D es especialmente tramposa: combina correctamente el término "facultativo" pero lo asocia indebidamente con "vinculante", que es justamente la excepción y no la regla.

Pregunta 8

Un Reglamento europeo es:

- A. Una fuente de derecho primario que no necesita transponerse al derecho nacional**

- B. Una fuente de derecho primario que necesita transponerse al derecho nacional
- C. Una fuente de derecho secundario que necesita transponerse al derecho nacional
- D. Una fuente de derecho secundario que no necesita transponerse al derecho nacional ✓**

Respuesta correcta: Opción D

Justificación:

El Derecho derivado de la Unión Europea incluye diversos instrumentos jurídicos destinados a garantizar la aplicación uniforme del Derecho europeo en los Estados miembros. Entre estos instrumentos destacan los reglamentos, las directivas y las decisiones, regulados en el artículo 288 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. La respuesta correcta es la opción d) porque el reglamento europeo constituye un acto jurídico de derecho derivado que tiene alcance general, es obligatorio en todos sus elementos y es directamente aplicable en todos los Estados miembros. Esto significa que no requiere transposición al derecho nacional para producir efectos jurídicos. La aplicación directa de los reglamentos tiene importantes implicaciones para la integración jurídica europea. Permite garantizar la uniformidad del Derecho de la Unión en todos los Estados miembros y evita divergencias en la aplicación de las normas europeas. Además, refuerza el principio de primacía del Derecho de la Unión sobre el derecho interno.

Pregunta 9

¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente el deber jurídico de soportar el daño?

- A. Es la obligación general de todos los ciudadanos de soportar cualquier actuación administrativa.
- B. Es la situación en la que el daño forma parte de las cargas normales de la vida en sociedad. ✓**
- C. Es la obligación exclusiva de los funcionarios públicos.
- D. Es la obligación de soportar únicamente sanciones administrativas.

Respuesta correcta: Opción B

Justificación:

El sistema de responsabilidad patrimonial en España (regulado en los artículos 32 y siguientes de la Ley 40/2015) se define como un sistema objetivo. Sin embargo, para que la Administración deba indemnizar, el daño debe ser antijurídico.

La Antijuridicidad del daño: Un daño es antijurídico no porque la conducta de la Administración sea ilegal, sino porque el ciudadano no tiene la obligación legal de soportar ese perjuicio.

El Deber de Soportar: Existe el deber jurídico de soportar el daño cuando la ley, o el ordenamiento jurídico en su conjunto, legitima la producción de ese perjuicio. Esto ocurre en situaciones como:

- Cargas generales de la vida en sociedad: Molestias derivadas de obras públicas necesarias, cambios de sentido en la circulación o la propia carga tributaria. Son sacrificios que se exigen a la colectividad por el beneficio común.
- Riesgos asumidos: Cuando el ciudadano se sitúa voluntariamente en una situación de riesgo.
- Títulos habilitantes: Cuando la Administración actúa en ejercicio de una potestad legítima que el ciudadano está obligado a aceptar.

Respuestas erróneas:

"Es la obligación general de todos los ciudadanos de soportar cualquier actuación administrativa": Esta afirmación es incorrecta y contraria al Estado de Derecho. Si una actuación administrativa causa un daño singular, efectivo y evaluable que el ciudadano no tiene por qué soportar, nace el derecho a la indemnización (Art. 106.2 CE).

"Es la obligación exclusiva de los funcionarios públicos": Es falso. Los funcionarios tienen deberes específicos derivados de su relación jerárquica y estatutaria, pero el concepto de "deber jurídico de soportar el daño" se aplica a cualquier administrado en su relación con el poder público.

"Es la obligación de soportar únicamente sanciones administrativas": Aunque las sanciones son un ejemplo claro de daño que se debe soportar (siempre que sean legales), el concepto es mucho más amplio y abarca cargas públicas, tributos y riesgos sociales comunes.

Pregunta 10

¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente el concepto de valor estimado del contrato según la LCSP?

- A. Es el importe máximo que la Administración puede pagar durante la ejecución del contrato
- B. Es el cálculo del importe total del contrato incluyendo posibles prórrogas y modificaciones previstas ✓**
- C. Es el precio final pagado al adjudicatario
- D. Es el presupuesto de licitación sin incluir impuestos

Respuesta correcta: Opción B

Justificación:

El valor estimado del contrato constituye un concepto fundamental dentro del sistema de contratación pública regulado por la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público. Este concepto se encuentra regulado en el artículo 101 de la LCSP y tiene como finalidad determinar el régimen jurídico aplicable al contrato, especialmente en lo relativo a los procedimientos de adjudicación y a los umbrales establecidos por el Derecho de la Unión Europea.

La respuesta correcta es la opción b) porque el valor estimado del contrato se calcula teniendo en cuenta el importe total del contrato, incluidas las posibles prórrogas, modificaciones previstas y opciones contractuales. Este cálculo permite determinar si el contrato supera los umbrales establecidos por la normativa europea y si debe aplicarse un procedimiento de contratación determinado.


La correcta determinación del valor estimado del contrato tiene importantes consecuencias jurídicas. Permite evitar prácticas fraudulentas como el fraccionamiento indebido del contrato para eludir la aplicación de procedimientos más exigentes. Asimismo, garantiza la correcta aplicación de los principios de publicidad y concurrencia en la contratación pública.

Pregunta 11

¿Cuál es el plazo general para interponer recurso de alzada?

- A. 15 días
- B. 1 mes si el acto es expreso ✓
- C. 3 meses en todo caso
- D. 2 meses

Respuesta correcta: Opción B

 **Justificación:**


El plazo es de 1 mes si el acto es expreso (art. 122).

Pregunta 12

La creación de Subdirecciones Generales se realiza mediante

- A. Ley orgánica
- B. Real Decreto del Consejo de Ministros ✓
- C. Orden ministerial
- D. Sentencia judicial

Respuesta correcta: Opción B

 **Justificación:**

Justificación Técnica (Art. 59.1 LRJSP)

La ley establece niveles de solemnidad jurídica según la importancia del órgano que se crea:


Órganos Directivos (Nivel Superior/Intermedio): Las Subdirecciones Generales se sitúan en el último escalafón de los órganos directivos centrales. Según el artículo 59.1, su creación, modificación y supresión se realiza por Real Decreto del Consejo de Ministros, a iniciativa del Ministro interesado y a propuesta del Ministro de Hacienda y Función Pública (o el competente en materia de Administraciones Públicas).

Pregunta 13

Elemento que recoge todas las actuaciones del procedimiento

- A. Expediente ✓
- B. Informe
- C. Resolución
- D. Notificación

Respuesta correcta: Opción A

 **Justificación:**

El expediente administrativo documenta todas las actuaciones.

Pregunta 14

Finalidad del registro electrónico

- A. Presentar documentos ✓
- B. Sustituir órganos

- C. Eliminar notificaciones
- D. Reemplazar expediente

Respuesta correcta: Opción A

 **Justificación:**


El registro permite presentar escritos electrónicamente.

Pregunta 15

¿Cuál es el fundamento constitucional del sistema de fuentes del Derecho Administrativo en España?

- A. El artículo 97 de la Constitución Española
- B. El artículo 9.3 de la Constitución Española ✓**
- C. El artículo 149 de la Constitución Española
- D. El artículo 117 de la Constitución Española

Respuesta correcta: Opción B

 **Justificación:**


El sistema de fuentes del Derecho Administrativo se integra dentro del sistema general del ordenamiento jurídico español, cuyo fundamento constitucional se encuentra principalmente en el artículo 9.3 de la Constitución Española de 1978. Este precepto establece una serie de principios estructurales del Estado de Derecho, entre los que destacan la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables, la seguridad jurídica y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

Pregunta 16

Instrumento que acredita presentación de documentos

- A. Expediente
- B. Registro ✓**
- C. Informe
- D. Resolución

Respuesta correcta: Opción B

 **Justificación:**


El registro acredita fecha y hora de presentación.

Pregunta 17

¿Qué papel desempeñan los reglamentos dentro del sistema de fuentes del Derecho Administrativo?

- A. Sustituir a las leyes en todas las materias
- B. Desarrollar y ejecutar el contenido de las leyes ✓**
- C. Modificar el contenido de las leyes
- D. Regular únicamente la actividad judicial

Respuesta correcta: Opción B

 **Justificación:**

La respuesta correcta es la opción b) porque la función principal de los reglamentos es desarrollar y ejecutar el contenido de las leyes aprobadas por el Parlamento. Este instrumento normativo permite adaptar el contenido de las leyes a las necesidades técnicas de la gestión administrativa. No obstante, los reglamentos están subordinados a la ley y deben respetar el principio de jerarquía normativa.

Pregunta 18

La adscripción de un consorcio a una Administración pública tiene como principal finalidad:

- A. Determinar su régimen jurídico y de control ✓**
- B. Limitar su capacidad operativa
- C. Eliminar su personalidad jurídica
- D. Determinar su financiación privada

Respuesta correcta: Opción A

Justificación:

Los consorcios constituyen una fórmula de cooperación interadministrativa regulada en la Ley 40/2015. Se trata de entidades con personalidad jurídica propia creadas por varias Administraciones públicas para el desarrollo conjunto de actividades de interés común.

La respuesta correcta es la opción a) porque la adscripción de un consorcio a una determinada Administración pública determina el régimen jurídico aplicable a la entidad, especialmente en materias como control financiero, régimen presupuestario o supervisión administrativa.

La determinación de la adscripción es un elemento esencial para garantizar la correcta integración del consorcio dentro del sistema institucional del sector público y para asegurar la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión de recursos públicos.

Pregunta 19

De los siguientes, indique cuál no es uno de los supuestos contemplados en el artículo 32 de la Ley 40/2015 de responsabilidad del Estado legislador:

- A. Actos legislativos de naturaleza no expropiatoria de derechos que el particular no tenga el deber jurídico de soportar.
- B. Norma con rango reglamentario contraria a la Constitución. ✓**
- C. Norma con rango de ley declarada inconstitucional.
- D. Norma contraria al Derecho de la Unión Europea.

Respuesta correcta: Opción B

Justificación:

En el Derecho Administrativo español, la responsabilidad del Estado Legislador se refiere específicamente a los daños causados por actos emanados del Poder Legislativo (Cortes Generales o Asambleas Legislativas de las CCAA), es decir, normas con rango de Ley.

El artículo 32 de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP) regula taxativamente estos supuestos en sus apartados 3, 4 y 5:

- Actos legislativos de naturaleza no expropiatoria (Art. 32.3)
- Leyes declaradas inconstitucionales (Art. 32.4)
- Normas contrarias al Derecho de la Unión Europea (Art. 32.5)

¿Por qué la opción del "Reglamento" es la incorrecta?

La norma con rango reglamentario (como un Real Decreto o una Orden Ministerial) es una norma dictada por la Administración Pública (Poder Ejecutivo), no por el Legislador. Si un reglamento es contrario a la Constitución o a la Ley, su nulidad y la indemnización de los daños que haya podido causar se rigen por los principios generales de la responsabilidad patrimonial de la Administración (Art. 32.1 y 32.2 de la Ley 40/2015), no bajo el epígrafe específico de "Responsabilidad del Estado Legislador".

Pregunta 20

¿El plazo máximo de audiencia a los interesados en el procedimiento administrativo es de?

- A. Quince días. ✓**
- B. Cinco días.
- C. Diez días.
- D. Treinta días.

Respuesta correcta: Opción A

Justificación:

El trámite de audiencia se regula en el artículo 82 de la Ley 39/2015 y constituye una garantía fundamental del procedimiento administrativo. Este trámite permite a los interesados formular alegaciones antes de que la Administración dicte resolución. La norma establece que el plazo no será inferior a diez días ni superior a quince días, por lo que el plazo máximo es de quince días. Este mecanismo garantiza el principio de contradicción y evita situaciones de indefensión.

Pregunta 21

En el recurso contencioso-administrativo, respecto a la vía de hecho, señale la opción correcta:

- A. Puede recurrirse directamente sin necesidad de actuación previa.
- B. Exige siempre la interposición previa de recurso administrativo.

C. El interesado puede formular un requerimiento potestativo a la Administración para que cese en la vía de hecho; si no es atendido en el plazo de diez días, podrá interponer recurso contencioso-administrativo. Si no formula requerimiento, dispone de un plazo de veinte días desde el inicio de la actuación para recurrir directamente. ✓

D. Sólo puede impugnarse si produce daños económicos cuantificables.

Respuesta correcta: Opción C

Justificación:

La vía de hecho se regula en el artículo 30 y en el 46.3 de la Ley 29/1998 y se refiere a actuaciones materiales de la Administración sin cobertura jurídica. Este supuesto constituye una de las manifestaciones más graves de actuación administrativa ilegal. La respuesta correcta es la c), ya que el artículo 30 dice: "En caso de vía de hecho, el interesado podrá formular requerimiento a la Administración actuante, intimando su cesación. Si dicha intimación no hubiere sido formulada o no fuere atendida dentro de los diez días siguientes a la presentación del requerimiento, podrá deducir directamente recurso contencioso-administrativo." Por otro lado el artículo 46.3 dice: "Si el recurso contencioso-administrativo se dirigiera contra una actuación en vía de hecho, el plazo para interponer el recurso será de diez días a contar desde el día siguiente a la terminación del plazo establecido en el artículo 30. Si no hubiere requerimiento, el plazo será de veinte días desde el día en que se inició la actuación administrativa en vía de hecho."

Por qué las demás opciones son incorrectas:

Opción A — "Puede recurrirse directamente sin necesidad de actuación previa": Es parcialmente verdadera (puede recurrirse directamente si no se formula requerimiento, en plazo de 20 días), pero omite que el requerimiento previo sí existe como cauce ordinario y condiciona los plazos. Decir que no hay ninguna "actuación previa" es incompleto e induciría a confusión.

Opción B — "Exige siempre la interposición previa de recurso administrativo": Falsa. La vía de hecho no exige agotar la vía administrativa mediante recursos.

Opción D — "Sólo puede impugnarse si produce daños económicos cuantificables": Falsa. La vía de hecho es impugnable por lesionar derechos e intereses legítimos de cualquier clase, sin limitarse a daños económicos.

Pregunta 22

Instrumento que comunica actos administrativos

- A. Notificación ✓**
- B. Informe
- C. Expediente
- D. Registro

Respuesta correcta: Opción A

Justificación:

La notificación comunica actos administrativos.

Pregunta 23

El personal al servicio de los organismos autónomos estatales

- A. Será funcionario o laboral y se regirá exclusivamente por el Estatuto Básico del Empleado Público
- B. Será laboral y se regirá por el derecho laboral
- C. Será funcionario o laboral y se regirá por el Estatuto Básico del Empleado Público y por la normativa laboral correspondiente ✓**
- D. Será funcionario y se regirá por el Estatuto Básico del Empleado Público

Respuesta correcta: Opción C

Justificación:

El régimen del personal al servicio de los organismos autónomos estatales se regula en la Ley 40/2015 y en el Estatuto Básico del Empleado Público (Real Decreto Legislativo 5/2015). Estas normas establecen los principios generales de la función pública y determinan las diferentes modalidades de personal al servicio del sector público.

La respuesta correcta es la opción c) porque el personal de los organismos autónomos puede ser funcionario o laboral. En el caso de los funcionarios se aplica el Estatuto Básico del Empleado Público y la normativa específica de función pública, mientras que el personal laboral se rige por la legislación laboral.

Este modelo permite combinar la estabilidad y profesionalidad del personal funcionario con la flexibilidad que proporciona la contratación laboral, lo que contribuye a mejorar la eficiencia en la gestión de los organismos públicos.

Pregunta 24

Principio que exige acceso a información pública

- A. Transparencia ✓**
- B. Eficacia
- C. Jerarquía
- D. Descentralización

Respuesta correcta: Opción A

Justificación:

La transparencia permite acceso a información pública.

Pregunta 25

La creación de organismos públicos estatales responde principalmente al principio de:

- A. Centralización administrativa
- B. Desconcentración administrativa
- C. Descentralización funcional ✓**
- D. Autonomía constitucional

Respuesta correcta: Opción C

Justificación:

El Derecho Administrativo contemporáneo distingue diferentes técnicas organizativas para la gestión de la actividad pública. Entre ellas destacan la centralización, la desconcentración y la descentralización administrativa. La creación de organismos públicos constituye un ejemplo paradigmático de descentralización funcional, figura ampliamente desarrollada en el Derecho administrativo español.

La respuesta correcta es la opción c) porque los organismos públicos se crean para gestionar determinadas actividades administrativas mediante una entidad dotada de personalidad jurídica propia y autonomía de gestión. Este modelo organizativo permite especializar la gestión de determinados servicios públicos.

La descentralización funcional permite mejorar la eficacia administrativa al dotar a ciertas entidades públicas de mayor autonomía operativa. Sin embargo, estas entidades siguen vinculadas a la Administración matriz y están sujetas a controles financieros y administrativos que garantizan la legalidad de su actuación.

Pregunta 26

Habrà un subdelegado del Gobierno

- A. Exclusivamente en cada provincia de las Comunidades Autónomas pluriprovinciales
- B. En cada provincia, con excepción de las que resida la sede del delegado del Gobierno
- C. En todas las provincias
- D. En cada provincia de las Comunidades Autónomas pluriprovinciales, pudiendo haberlos también en las Comunidad Autónomas uniprovinciales ✓**

Respuesta correcta: Opción D

Justificación:

La organización territorial del Estado se articula a través de Delegaciones del Gobierno en las Comunidades Autónomas y Subdelegaciones del Gobierno en las provincias. Este sistema se regula en la Ley 40/2015 y en el Real Decreto 617/1997, que establece el régimen jurídico de los Subdelegados del Gobierno.

La respuesta correcta es la opción d) porque en las Comunidades Autónomas pluriprovinciales existe necesariamente un Subdelegado del Gobierno en cada provincia, mientras que en las Comunidades Autónomas uniprovinciales puede existir o no esta figura dependiendo de la estructura administrativa.

Esta configuración permite adaptar la organización administrativa del Estado a la estructura territorial del país. De esta forma se garantiza la presencia administrativa del Estado en todo el territorio respetando al mismo tiempo la diversidad organizativa de las Comunidades Autónomas.

Pregunta 27

La implantación del siguiente impuesto es obligatoria para las Entidades Locales:

- A. Impuesto de Sucesiones y Donaciones.
- B. Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos.
- C. Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras.

D. Impuesto de Actividades Económicas. ✓

Respuesta correcta: Opción D

Justificación:

En el ámbito de la Hacienda Local en España, la potestad tributaria de los Ayuntamientos no es absoluta, sino que viene rígidamente definida por el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004.

De acuerdo con el artículo 59 de dicha norma, los impuestos municipales se clasifican en dos categorías según la obligatoriedad de su exacción:

- Impuestos de exacción obligatoria (Art. 59.1): IBI, IAE e IVTM.

- Impuestos de exacción potestativa (Art. 59.2): IIVTNU (Plusvalía), ICIO e Impuesto sobre Gastos Suntuarios.

Respuestas erróneas:

"Impuesto de Sucesiones y Donaciones": Se trata de un impuesto estatal cuya gestión y recaudación está cedida a las Comunidades Autónomas, no es en ningún caso un impuesto local.

"Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos (IIVTNU)": Como se ha indicado, es potestativo.

"Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO)": Es también potestativo.

Pregunta 28

¿Qué papel desempeña la costumbre dentro del sistema de fuentes del Derecho Administrativo?

- A. Tiene el mismo valor que la ley
- B. Se aplica siempre con carácter preferente
- C. Tiene un papel limitado y subsidiario ✓**
- D. Sustituye a los reglamentos administrativos

Respuesta correcta: Opción C

Justificación:

La costumbre constituye una de las fuentes del derecho reconocidas por el artículo 1 del Código Civil. Sin embargo, su importancia dentro del Derecho Administrativo es considerablemente menor que en otras ramas del derecho, debido al predominio del principio de legalidad y de la ley escrita en la actuación administrativa. La respuesta correcta es la opción c) porque la costumbre tiene un papel limitado y subsidiario en el Derecho Administrativo. Solo puede aplicarse cuando no existe una norma legal o reglamentaria aplicable y siempre que no sea contraria a la moral o al orden público. La limitada relevancia de la costumbre en el Derecho Administrativo refleja el carácter formalizado y normativizado de la actividad administrativa. El predominio de la ley y del reglamento garantiza que la actuación de la Administración se base en normas escritas y conocidas por los ciudadanos.

Pregunta 29

En relación con la indemnización en materia de responsabilidad patrimonial, ¿qué principio debe respetarse?

- A. El principio de reparación parcial del daño
- B. El principio de reparación integral del daño ✓**
- C. El principio de sanción administrativa
- D. El principio de discrecionalidad administrativa

Respuesta correcta: Opción B

Justificación:

La finalidad del sistema de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas es garantizar la reparación de los daños causados a los ciudadanos como consecuencia de la actividad administrativa. Este objetivo se basa en el principio de reparación integral del daño, que implica que la indemnización debe restablecer completamente la situación patrimonial del perjudicado. Este principio se encuentra recogido en el artículo 34 de la Ley 40/2015, que establece los criterios para determinar la cuantía de la indemnización correspondiente.

La respuesta correcta es la opción b) porque la indemnización debe cubrir tanto el daño emergente como el lucro cesante. El daño emergente se refiere a las pérdidas patrimoniales efectivamente sufridas por el perjudicado, mientras que el lucro cesante corresponde a las ganancias que el ciudadano dejó de obtener como consecuencia del daño. Este criterio de valoración responde a los principios generales del Derecho de daños y ha sido desarrollado por la jurisprudencia del Tribunal Supremo. La aplicación del principio de reparación integral cumple una función esencial dentro del sistema de responsabilidad patrimonial, ya que garantiza que el ciudadano quede completamente resarcido por el perjuicio sufrido. De este modo se restablece el equilibrio patrimonial y se refuerza la confianza de los ciudadanos en el funcionamiento del sistema administrativo.

Pregunta 30

Los Estatutos de Autonomía se reforman según la Constitución española de 1978:

- A. Por el procedimiento establecido en los mismos, y requerirá, en todo caso, la aprobación por las Cortes Generales, mediante ley orgánica. ✓**
- B. Por una ley orgánica aprobada por las Cortes Generales.
- C. Por ley orgánica y por mayoría absoluta de la Asamblea Legislativa de la Comunidad Autónoma.
- D. Por ley orgánica aprobada por las Cortes Generales y aprobación en referéndum por los electores de la Comunidad Autónoma.

Respuesta correcta: Opción A

Justificación:

Justificación Jurídica (Art. 147.3 CE)

El artículo 147.3 de la Constitución establece el marco general para la reforma de cualquier Estatuto de Autonomía, sin distinción del procedimiento de acceso a la autonomía: "La reforma de los Estatutos se ajustará al procedimiento establecido en los mismos y requerirá, en todo caso, la aprobación por las Cortes Generales, mediante ley orgánica." Este precepto impone dos requisitos acumulativos:

1. Respeto a la autonomía: Debe seguirse el procedimiento de reforma que la propia Comunidad Autónoma ha diseñado en su Estatuto.

2. Intervención estatal: El Estado debe ratificar la reforma mediante Ley Orgánica aprobada en las Cortes Generales.

Opciones Incorrectas:

¿Por qué no es correcta la opción D? Aunque el artículo 152.2 CE exige referéndum para los Estatutos de las comunidades del art. 151, esta no es la regla aplicable a todos los Estatutos. La opción A es la única que describe el procedimiento común y obligatorio para la totalidad de los Estatutos de Autonomía de España.

La insuficiencia de la Ley Orgánica (Opción B): No basta con una ley orgánica estatal; la iniciativa y el procedimiento deben nacer en la propia Comunidad Autónoma según sus reglas internas.

Pregunta 31

En relación con los Decretos Legislativos regulados en la Constitución Española de 1978:

- A. La delegación legislativa deberá otorgarse mediante una ley de bases cuando su objeto sea refundir varios textos legales o por una ley ordinaria cuando se trate de la formación de textos articulados.
- B. La delegación legislativa no se agota por el uso que de ella haga el Gobierno mediante la publicación de la norma correspondiente.
- C. Las leyes de delegación no podrán establecer fórmulas adicionales de control por ser competencia única de los Tribunales.
- D. Cuando una proposición de ley o una enmienda fuere contraria a una delegación legislativa en vigor, el Gobierno está facultado para oponerse a su tramitación. ✓**

Respuesta correcta: Opción D

Justificación:

Justificación de la Opción Correcta (Art. 84 CE)

El artículo 84 de la Constitución blindada la potestad legislativa delegada del Gobierno durante el tiempo que dure el plazo de la delegación: "Cuando una proposición de ley o una enmienda fuere contraria a una delegación legislativa en vigor, el Gobierno podrá oponerse a su tramitación. En tal supuesto, podrá presentarse una proposición de ley para la derogación total o parcial de la ley de delegación."

Esta facultad se conoce como el "veto de tramitación". Su objetivo es evitar que el Parlamento "interfiera" o legisle sobre la misma materia que ha delegado al Gobierno mientras el plazo sigue corriendo, garantizando así la coherencia de la labor normativa del Ejecutivo.

Análisis de las opciones incorrectas:

- El cruce de conceptos (Opción A): Es un error recurrente. La CE establece en el Art. 82.2 que la delegación es mediante Ley de Bases para Textos Articulados y mediante Ley Ordinaria para Textos Refundidos. La opción invierte estos términos.
- El agotamiento de la delegación (Opción B): El artículo 82.3 es tajante: la delegación legislativa se agota por el uso que de ella haga el Gobierno mediante la publicación de la norma.
- Las fórmulas adicionales de control (Opción C): El artículo 82.6 dice exactamente lo contrario: las Cortes sí pueden establecer fórmulas adicionales de control parlamentario en la propia ley de delegación.

Pregunta 32

La Constitución Española permite que una ley de bases pueda:

- A. Autorizar la modificación de la propia Ley de bases.
- B. Facultar al Gobierno para dictar normas con carácter retroactivo.
- C. Permitir la subdelegación en el Ministro sectorialmente competente.
- D. Condicionar la entrada en vigor del texto articulado que elabore el Gobierno a su previa aprobación por el Pleno del Congreso de los Diputados y del Senado. ✓**

Respuesta correcta: Opción D**Justificación:**

Justificación jurídica basada en la Constitución Española (CE):

Análisis de la Opción Correcta (Art. 82.6 CE)

La delegación legislativa no es un cheque en blanco. El artículo 82.6 de la CE establece lo siguiente: "Sin perjuicio de la propia competencia de los Tribunales, las leyes de delegación podrán establecer en cada caso fórmulas adicionales de control."

Aunque el Gobierno es quien dicta el Decreto Legislativo, las Cortes Generales pueden reservarse mecanismos de supervisión. Exigir que el texto final pase por el Pleno antes de su entrada en vigor se considera una de estas "fórmulas adicionales de control".

Análisis de las Prohibiciones (Por qué las otras son incorrectas):

- Prohibición de modificar la propia Ley de Bases: El artículo 83.a) prohíbe taxativamente que una ley de bases autorice la modificación de sí misma.
- Prohibición de retroactividad: El artículo 83.b) impide que la ley de bases faculte al Gobierno para dictar normas con carácter retroactivo.
- Prohibición de subdelegación: El artículo 82.3 establece que la delegación se otorga al Gobierno (Consejo de Ministros), no pudiendo permitir la subdelegación a autoridades distintas del propio Gobierno.

Pregunta 33**Señale la afirmación correcta a la luz de lo establecido en el artículo 55.1 de la Constitución Española, que regula la suspensión de los derechos y libertades:**

- A. Los derechos recogidos en el artículo 17, excepto el apartado 3, de la Constitución podrán ser suspendidos cuando se acuerde la declaración del estado de alarma, de excepción o de sitio en los términos previstos en la Constitución.
- B. Los derechos recogidos en el artículo 19 de la Constitución podrán ser suspendidos cuando se acuerde la declaración del estado de alarma, de excepción o de sitio en los términos previstos en la Constitución.
- C. Los derechos recogidos en el artículo 17, excepto el apartado 3, de la Constitución podrán ser suspendidos cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio en los términos previstos en la Constitución. ✓**
- D. Los derechos recogidos en el artículo 16 de la Constitución podrán ser suspendidos cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio en los términos previstos en la Constitución.

Respuesta correcta: Opción C**Justificación:**

Justificación detallada basada en el artículo 55.1 de la Constitución Española (CE) y la Ley Orgánica 4/1981:

1. El Estado de Alarma como Distractor (Opciones A y B)

El error fundamental de las dos primeras opciones radica en incluir el estado de alarma. Según el tenor literal del artículo 55.1 CE, la suspensión de derechos fundamentales solo es constitucionalmente posible en los estados de excepción y de sitio.

Nota técnica: El estado de alarma (Art. 116.2 CE) permite la limitación de derechos (como la circulación), pero nunca su suspensión. Cualquier enunciado que vincule "alarma" con "suspensión de derechos del art. 55.1" debe ser descartado de inmediato en un examen de este nivel.

2. Análisis de la Opción Correcta (Opción C)

Esta opción reproduce fielmente la lógica del artículo 55.1: se refiere a los estados de excepción y de sitio, e identifica el artículo 17 (Derecho a la libertad y seguridad). El artículo 55.1 establece una excepción crucial: "Se exceptúa de lo establecido anteriormente el apartado 3 del artículo 17 para el supuesto de declaración de estado de excepción".

¿Por qué es correcta? Porque el apartado 3 del artículo 17 (derecho a ser informado de sus derechos y a la asistencia de abogado) es el núcleo duro de las garantías del detenido.

3. La Intocabilidad del Artículo 16 (Opción D)

El artículo 16 de la CE regula la libertad ideológica, religiosa y de culto. Este derecho no figura en la lista taxativa del artículo 55.1. En España, bajo ninguna circunstancia puede suspenderse la libertad ideológica o de creencias.

Pregunta 34

El proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado integrado por el articulado con sus anexos y los estados de ingresos y gastos, con el nivel de especificación de créditos establecidos en los artículos 40 y 41 de la Ley General Presupuestaria, se remitirá a las Cortes Generales antes del día:

- A. 1 de octubre del año anterior al que se refieran. ✓
- B. 31 de octubre del año anterior al que se refieran.
- C. 1 de agosto del año anterior al que se refieran.
- D. 31 de agosto del año anterior al que se refieran.

Respuesta correcta: Opción A

Justificación:

Esta obligación temporal del Gobierno está consagrada tanto en la Constitución Española como en la Ley 47/2003, General Presupuestaria:

- Constitución Española (Art. 134.3): Establece que "El Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior". Dado que el año presupuestario expira el 31 de diciembre, el plazo límite es el 1 de octubre.
- Ley 47/2003, General Presupuestaria (Art. 37.1): Reitera este plazo indicando que el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado se remitirá a las Cortes Generales antes del día 1 de octubre de cada año.

Pregunta 35

¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente el procedimiento para la aprobación de una ley orgánica por las Cortes Generales según la Constitución Española de 1978?

- A. Debe ser aprobada por mayoría absoluta del Senado en una votación final sobre el conjunto del proyecto.
- B. Requiere mayoría simple en el Congreso de los Diputados y mayoría absoluta en el Senado.
- C. Debe ser aprobada por mayoría absoluta del Congreso de los Diputados en una votación final sobre el conjunto del proyecto. ✓
- D. Requiere la aprobación por mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados y en el Senado.

Respuesta correcta: Opción C

Justificación:

Justificación Jurídica (Art. 81.2 CE)

El artículo 81.2 de la Constitución define el requisito procedimental que dota a la Ley Orgánica de su especial rigidez: "La aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas exigirá mayoría absoluta del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del proyecto."

Este precepto establece tres condiciones acumulativas:

1. Sede: El requisito se exige específicamente en el Congreso de los Diputados.
2. Quórum: Mayoría absoluta (la mitad más uno de los miembros de la Cámara, es decir, 176 votos), no basta la mayoría simple.
3. Momento: Debe realizarse una votación final sobre la totalidad del texto, una vez finalizado el debate de enmiendas.

Análisis del "Bicameralismo Imperfecto":

El Senado interviene en la tramitación de la Ley Orgánica siguiendo el procedimiento ordinario. La CE no exige una mayoría reforzada en la Cámara Alta para la aprobación de leyes orgánicas; el Senado funciona, por regla general, con mayoría simple.

Resumen de Errores en los Distractores:

- Mayoría absoluta en el Senado: La CE no exige una mayoría reforzada en la Cámara Alta.
- Mayoría absoluta en ambas Cámaras: Es un error frecuente. La Constitución es taxativa al situar la exigencia de la mayoría absoluta exclusivamente en el Congreso de los Diputados.

Pregunta 36

De los siguientes expedientes, conforme a la Ley General Presupuestaria, ¿cuál no está sometido a fiscalización previa de la Intervención?:

- A. Un expediente abierto para la licitación de una obra de valor superior a 6 millones de euros y que ha de publicarse, entre otros sitios, en el Diario Oficial de la Unión Europea.
- B. La concesión de una subvención de carácter general.
- C. Un suministro de material informático que no puede adquirirse por el Servicio Central de Compras del Estado por valor de 200.000 euros.

D. Una subvención nominativa recogida en la ley de presupuestos como una transferencia corriente.

✓

Respuesta correcta: Opción D**Justificación:**

Justificación Jurídica (Art. 150 LGP)

El artículo 150.2 de la Ley General Presupuestaria establece de forma taxativa los supuestos que no están sometidos a fiscalización previa. Literalmente, el apartado c) señala: "No estarán sometidos a fiscalización previa: [...] c) Las transferencias corrientes y de capital."

En su planteamiento, la cuarta opción describe una subvención nominativa (aquella que aparece con nombre, apellidos y cuantía directamente en los estados de gastos de los PGE) que se gestiona como una transferencia corriente. Al estar el gasto ya determinado por la propia Ley de Presupuestos, el legislador exime a estos expedientes de la fiscalización previa individualizada de la Intervención.

Análisis de los casos sometidos a fiscalización (Opciones incorrectas):

- Licitación de obra > 6 millones de euros: Requiere preceptivamente la fiscalización previa.
- Subvención de carácter general: Las subvenciones de concurrencia competitiva o concesión directa están sujetas a fiscalización previa.
- Suministro de 200.000 euros: Al superar ampliamente el umbral del contrato menor (actualmente 15.000 euros más IVA para suministros), este expediente debe ser fiscalizado antes de su adjudicación.

Pregunta 37**Según la normativa vigente de Fundaciones, la constitución de una fundación pública estatal requiere de:**

- A. Autorización previa del Consejo de Ministros.
- B. Una ley que la autorice. ✓**
- C. Autorización previa del Ministerio de Economía y Hacienda.
- D. Autorización previa de la Dirección General de Patrimonio del Estado.

Respuesta correcta: Opción B**Justificación:**

La Disposición Derogatoria Única, apartado 2.e) de la Ley 40/2015, derogó los artículos 44, 45 y 46 de la Ley 50/2002 para unificar el régimen de las fundaciones públicas dentro del Título II de la nueva norma básica del Sector Público.

¿Cómo se constituye hoy una Fundación Pública Estatal?

A día de hoy, bajo la Ley 40/2015, el requisito es mucho más exigente:

Artículo 129.1 (Ley 40/2015): "La creación de las fundaciones del sector público estatal o la adquisición de este carácter por una fundación preexistente se realizará por Ley".

Notas:

La transición de una simple "autorización del Consejo de Ministros" (un acto administrativo) a una "creación por Ley" (un acto parlamentario) responde a la necesidad de frenar la denominada "huida del Derecho Administrativo".

Al exigir una Ley para crear una fundación pública, el legislador garantiza:

- Control Parlamentario: El Gobierno no puede crear entes sujetos al derecho privado por decreto; debe pasar por las Cortes.
- Transparencia: Se evita el uso de fundaciones para eludir los controles de contratación y personal propios de la Administración activa.
- Seguridad Jurídica: Se establece un régimen uniforme para todo el Sector Público Institucional.

Pregunta 38**¿Cuál de los siguientes bienes de propiedad de las Administraciones Públicas tendrá la condición de bien de dominio privado o patrimonial, a tenor de lo dispuesto en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas?**

- A. Títulos representativos de acciones en el capital de sociedades mercantiles. ✓**
- B. Los inmuebles de los organismos públicos en los que se alojen servicios del mismo.
- C. El dinero.
- D. Los recursos financieros de la Hacienda Pública.

Respuesta correcta: Opción A**Justificación:**

El artículo 7 de la LPAP define los bienes de carácter patrimonial o de dominio privado por exclusión (aquellos que no son demaniales). No obstante, el apartado 2 establece una lista taxativa de bienes que tienen esta consideración en todo caso:

"Tienen en todo caso la consideración de bienes patrimoniales: [...] e) Los derechos de arrendamiento y demás derechos reales, así como los títulos representativos de acciones y participaciones en el capital de sociedades mercantiles o de obligaciones emitidas por éstas..."

Esto responde a que la participación del Estado en empresas no suele estar destinada al uso público ni a un servicio público directo, sino a la gestión de intereses económicos y patrimoniales.

Análisis de las Exclusiones (El error en "El Dinero")

El artículo 3.2 de la LPAP establece: "No se entenderán integrados en el patrimonio de las Administraciones públicas el dinero, los valores, los créditos y los demás recursos financieros de su Hacienda..."

¿Por qué son incorrectas las opciones C y D? Porque, jurídicamente, el dinero y los recursos financieros no se consideran "patrimonio" bajo la Ley 33/2003, sino que se rigen por la Ley General Presupuestaria.

El carácter Demanial de los edificios administrativos (Opción B)

El artículo 5.2.b) de la LPAP establece que son bienes de dominio público (demaniales) aquellos que se encuentren destinados a un servicio público.

Pregunta 39

Según la Ley del Patrimonio de las AAPP, los inmuebles que carecieren de dueño:

- A. Pertenecen al municipio donde radicarán.
- B. Pertenecen a la Comunidad Autónoma.
- C. Pertenecen a la Administración General del Estado. ✓**
- D. Son bienes demaniales.

Respuesta correcta: Opción C

Justificación:

La Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas (LPAP), es clara en su artículo 17.1 al establecer el régimen de los denominados inmuebles vacantes o bona vacantia:

"Pertenecen a la Administración General del Estado los inmuebles que carecieren de dueño."

Adquisición por ministerio de la Ley: Según el artículo 17.2, la adquisición se produce de forma automática, sin necesidad de que medie ningún acto o declaración formal por parte de la Administración.

Pregunta 40

De acuerdo con la Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, ¿con qué periodicidad presentará el Consejo de Participación de las Personas LGTBI una memoria detallando su actividad, reuniones y actuaciones?

- A. Cada dos meses.
- B. Cada seis meses. ✓**
- C. Anualmente.
- D. Cada tres meses.

Respuesta correcta: Opción B

Justificación:

Artículo 9. Consejo de Participación de las Personas LGTBI.

«El Consejo de Participación de las Personas LGTBI presentará una memoria con carácter semestral, detallando su actividad, reuniones y actuaciones conforme a la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.»

Pregunta 41

Forman parte del derecho originario de la UE los siguientes textos normativos:

- A. El Tratado Constitutivo de la CECA, de 18 de abril de 1951 (ya expirado), el Tratado CEE y EURATOM de 25 de marzo de 1957, la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU de 10 de diciembre de 1948, el Acta Única Europea de 1986, el Tratado de Maastricht de 7 de febrero de 1992, el Tratado de Niza de 26 de febrero de 2001 y el Tratado por el que se establece una Constitución para Europa de 29 de octubre de 2004.
- B. El Tratado Constitutivo de la CECA, de 18 de abril de 1951 (ya expirado), el Tratado CEE y EURATOM de 25 de marzo de 1957 (ambos), el Acta Única Europea de 1986, el Tratado de Maastricht de 7 de febrero de 1992, el Tratado de Amsterdam de 2 de octubre de 1997, el Tratado de Niza de 26 de febrero de 2001 y el Tratado de Lisboa de 13 de diciembre de 2007. ✓**

C. El Tratado Constitutivo de la CECA, de 18 de abril de 1951 (ya expirado), el Tratado CEE y EURATOM de 25 de marzo de 1957 (ambos), el Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de 4 de noviembre de 1950, el Tratado de Maastricht de 7 de febrero de 1992, el Tratado de Niza de 26 de febrero de 2001 y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea de 29 de octubre de 2004.

D. El Tratado CEE y EURATOM de 5 de marzo de 1957, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 16 de diciembre de 1966, el Acta Única Europea de 1986, el Tratado de Maastricht de 7 de febrero de 1992, el Tratado de Amsterdam de 2 de octubre de 1997, el Tratado por el que se establece una Constitución para Europa de 29 de octubre de 2004 y el Tratado de Lisboa de 13 de diciembre de 2007.

Respuesta correcta: Opción B

Justificación:

El derecho originario de la Unión Europea está formado exclusivamente por los tratados constitutivos y sus modificaciones (es decir, el "derecho primario"). Esto incluye:

Tratados fundacionales:

- CECA (1951, aunque expirado)
- CEE y EURATOM (1957)

Tratados modificativos:

- Acta Única Europea (1986)
- Tratado de Maastricht (1992)
- Tratado de Ámsterdam (1997)
- Tratado de Niza (2001)
- Tratado de Lisboa (2007)

Por qué las otras opciones son incorrectas:

Opción 1: Incluye la Declaración Universal de Derechos Humanos (ONU) → no es derecho originario de la UE. Además, incluye el fallido Tratado Constitucional de 2004.

Opción 3: Incluye el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) → pertenece al Consejo de Europa, no a la UE.

Opción 4: Incluye el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ONU) → tampoco es derecho originario de la UE.

Pregunta 42

Actualmente son candidatos oficiales a adherirse a la Unión Europea los siguientes estados:

A. Macedonia, Montenegro, Serbia y Turquía. ✓

B. Macedonia, Islandia, Croacia, Montenegro y Turquía.

C. Croacia, Islandia, Montenegro, Serbia y Turquía.

D. Croacia, Macedonia, Islandia, Serbia y Turquía.

Respuesta correcta: Opción A

Justificación:

La opción A) es la correcta: Macedonia, Montenegro, Serbia y Turquía. Las demás opciones no se ajustan a lo previsto en la normativa o en el contexto del enunciado, porque Croacia se incorporó en 2013.

Pregunta 43

El artículo 5.3 del Tratado de la Unión Europea establece que el principio de subsidiariedad supone que la Unión intervendrá en el siguiente supuesto:

A. En un ámbito que sea de competencia compartida y sólo en caso de que los objetivos de la acción pretendida se incluyan en los tratados

B. En un ámbito que sea de su competencia exclusiva y sólo en caso de que los objetivos de la acción pretendida no puedan ser alcanzados de manera suficiente por los Estados Miembros, a nivel central, sino que puedan alcanzarse mejor a escala de la Unión.

C. En un ámbito que sea de su competencia exclusiva y sólo en caso de que los objetivos de la acción pretendida no puedan ser alcanzados de manera suficiente por los Estados Miembros, ni a nivel central ni a nivel regional, sino que puedan alcanzarse mejor a escala de la Unión.

D. En un ámbito que no sea de su competencia exclusiva y sólo en caso de que los objetivos de la acción pretendida no puedan ser alcanzados de manera suficiente por los Estados Miembros, ni a nivel central ni a nivel regional y local, sino que puedan alcanzarse mejor a escala de la Unión. ✓

Respuesta correcta: Opción D

Justificación:

La opción D) es la correcta porque: En un ámbito que no sea de su competencia exclusiva y sólo en caso de que los objetivos de la acción pretendida no puedan ser alcanzados de manera suficiente por los Estados Miembros, ni a nivel central ni a nivel regional y local, sino que puedan alcanzarse mejor a escala de la Unión. Las demás opciones no se ajustan a lo previsto en la normativa o en el contexto del enunciado.

Pregunta 44

El artículo 21.2 de la Ley 39/2015 permite que normas reglamentarias fijen el plazo máximo para resolver un procedimiento administrativo. ¿Cuál es el plazo máximo que puede establecerse mediante un Real Decreto para resolver un procedimiento, sin necesidad de que exista una norma con rango de ley que lo ampare?

- A. Tres meses, ya que es el plazo supletorio previsto en el artículo 21.2 para los procedimientos cuya norma reguladora no establezca plazo específico, y ninguna norma reglamentaria puede superarlo.
- B. Seis meses, que es el techo máximo que puede fijar cualquier norma sin rango de ley; solo una norma con rango de ley o el Derecho de la Unión Europea pueden establecer un plazo superior. ✓**
- C. Un año, puesto que el Real Decreto, al ser aprobado por el Consejo de Ministros, goza de un rango normativo superior al de un simple reglamento ministerial y puede superar el límite de seis meses sin necesidad de ley.
- D. No existe límite temporal máximo para los plazos fijados mediante Real Decreto, dado que este tipo de norma puede desarrollar libremente la Ley 39/2015 en materia de plazos de resolución sin restricción alguna.

Respuesta correcta: Opción B

Justificación:

El artículo 21.2 de la Ley 39/2015 establece con claridad la siguiente estructura de plazos: en primer lugar, el plazo máximo de resolución será el fijado por la norma reguladora del procedimiento; en segundo lugar, ese plazo "no podrá exceder de seis meses salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea"; y, en tercer lugar, a falta de norma específica, el plazo supletorio será de tres meses. Un Real Decreto es una norma de rango reglamentario —no tiene rango de ley—, por lo que queda sometido al techo de seis meses que impone el propio artículo 21.2. Solo una ley formal, un real decreto-ley, un real decreto legislativo o una norma de Derecho de la UE pueden superar ese umbral. La opción A confunde el plazo supletorio (tres meses) con el límite reglamentario, invirtiendo ambos conceptos. La opción C es incorrecta porque el Real Decreto, pese a ser aprobado por el Consejo de Ministros, es una norma reglamentaria que no tiene rango de ley y no puede, por tanto, superar los seis meses. La opción D carece de todo fundamento legal: el artículo 21.2 establece expresamente ese límite máximo de seis meses para las normas sin rango de ley.

Pregunta 45

¿Plazo general máximo para resolver si la norma no establece uno?

- A. Tres meses ✓**
- B. Seis meses
- C. Un año
- D. Un mes

Respuesta correcta: Opción A

Justificación:

El Artículo 21.3 de la Ley 39/2015 dice: "Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo, éste será de tres meses."

Pregunta 46

El artículo 49 del Tratado de la Unión Europea establece el procedimiento de la solicitud de ingreso en la UE, mientras que los criterios que se deben cumplir para ser admitido se fijaron en el Consejo Europeo de Copenhague de 1993 y son los siguientes:

- A. Instituciones democráticas estables, imperio de la ley y respeto a los Derechos Humanos y a las minorías, superávit económico y capacidad del candidato de asumir las obligaciones de adhesión, incluida la observancia de los fines de la Unión Política, Económica y Monetaria.

B. Instituciones democráticas estables, imperio de la ley y respeto a los Derechos Humanos y a las minorías, economía de mercado y capacidad del candidato de asumir las obligaciones de adhesión, incluida la observancia de los fines de la Unión Política, Económica y Monetaria. ✓

C. Partidos políticos democráticos, economía de mercado y capacidad para proponer iniciativas a escala europea y para asumir las obligaciones de adhesión, incluida la observancia de los fines de la Unión Política, Económica y Monetaria.

D. Partidos políticos democráticos, superávit económico y capacidad del candidato de asumir las obligaciones económicas y de ajuste presupuestario del Banco Central Europeo.

Respuesta correcta: Opción B

Justificación:

La opción b) es la correcta porque: Instituciones democráticas estables, imperio de la ley y respeto a los Derechos Humanos y a las minorías, economía de mercado y capacidad del candidato de asumir las obligaciones de adhesión, incluida la observancia de los fines de la Unión Política, Económica y Monetaria. Las demás opciones no se ajustan a lo previsto en la normativa o en el contexto del enunciado.

Pregunta 47

De los siguientes actos, cuál de ellos no se encuentra en la relación de actos nulos de pleno derecho del artículo 47 de la Ley 39/2015:

A. Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio.

B. Los que tengan un contenido imposible.

C. Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido.

D. Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo legal. ✓

Respuesta correcta: Opción D

Justificación:

El artículo 47.1 de la Ley 39/2015 establece un listado tasado de supuestos de nulidad de pleno derecho, entre los que destacan la incompetencia manifiesta, el contenido imposible o la omisión total del procedimiento. Este listado tiene carácter cerrado y responde a la necesidad de restringir la nulidad a supuestos especialmente graves que afectan a la validez estructural del acto administrativo. La respuesta correcta es la d), ya que el precepto legal se refiere exclusivamente a los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional, no a cualquier derecho con amparo legal. Las otras opciones sí están expresamente recogidas en el artículo 47.1. La diferencia entre amparo constitucional y legal es clave: sólo los derechos fundamentales (arts. 14 a 29 CE) generan nulidad automática. Esta distinción tiene importantes consecuencias: limita la nulidad a supuestos excepcionales y evita la inseguridad jurídica que generaría una extensión indiscriminada. En términos prácticos, los actos que vulneren derechos no fundamentales serán anulables (art. 48), lo que implica un régimen distinto de impugnación, plazos y efectos.

Pregunta 48

Respecto a la nulidad como a la anulabilidad (señale la falsa):

A. Los actos nulos o anulables que, sin embargo, contengan los elementos constitutivos de otro distinto producirán los efectos de éste.

B. La nulidad o anulabilidad de un acto no implicará la de los sucesivos en el procedimiento que sean independientes del primero.

C. La nulidad o anulabilidad en parte del acto administrativo no implicará la de las partes del mismo independientes de aquélla, incluso aunque la parte viciada sea de tal importancia que sin ella el acto administrativo no hubiera sido dictado. ✓

D. Una vez iniciado el procedimiento de revisión de oficio, el órgano competente para declarar la nulidad o lesividad podrá suspender la ejecución del acto, cuando esta pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación.

Respuesta correcta: Opción C

Justificación:

La respuesta falsa es la c) La nulidad o anulabilidad en parte del acto administrativo no implicará la de las partes del mismo independientes de aquélla, incluso aunque la parte viciada sea de tal importancia que sin ella el acto administrativo no hubiera sido dictado.

¿Por qué es falsa? El error reside en la parte final de la frase. Según el Artículo 49.2 de la Ley 39/2015 (denominado "Incomunicación de la nulidad"), la nulidad o anulabilidad de una parte del acto no afecta a las demás que sean

independientes, SALVO que la parte viciada sea de tal importancia que sin ella el acto administrativo no hubiera sido dictado. En ese caso, la nulidad de la parte principal sí arrastraría al resto del acto.

Análisis de las opciones correctas (Verdaderas):

- a) Se corresponde con el Artículo 50 ("Conversión de actos viciados").
- b) Se corresponde con el Artículo 49.1. Solo los actos que dependan directamente del acto nulo se verán invalidados.
- d) Se corresponde con el Artículo 108. Es una medida cautelar lógica para evitar que, mientras se decide si el acto es nulo, se produzcan daños irreversibles por su ejecución.

Pregunta 49

Actos contra los que no cabe recurso administrativo:

- A. Las disposiciones administrativas de carácter general. ✓**
- B. Resolución de procedimiento administrativo.
- C. Silencio administrativo negativo por transcurso del plazo legal.
- D. Actos que produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos.

Respuesta correcta: Opción A

Justificación:

El régimen de recursos administrativos se regula en los artículos 112 y siguientes de la Ley 39/2015. En particular, el artículo 112.3 establece que no cabe recurso administrativo contra las disposiciones administrativas de carácter general, las cuales sólo pueden ser impugnadas directamente ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Esta limitación responde a la naturaleza normativa de dichas disposiciones. La respuesta correcta es la a), ya que las disposiciones generales quedan excluidas del sistema de recursos administrativos. Las demás opciones son incorrectas porque sí pueden ser objeto de recurso: las resoluciones ponen fin o no a la vía administrativa, el silencio administrativo es recurrible y los actos que causen indefensión también. La consecuencia fundamental es que el control de la legalidad de las disposiciones generales corresponde exclusivamente al orden jurisdiccional contencioso-administrativo, lo que refuerza la separación entre función normativa y función revisora.

Pregunta 50

El recurso de alzada (señale la falsa):

- A. El plazo para la interposición del recurso de alzada será de un mes, si el acto fuera expreso.
- B. Una vez interpuesto el recurso, la Administración dispone de tres meses para resolver.
- C. Cuando el recurso de alzada se haya interpuesto contra la desestimación por silencio administrativo de una solicitud por el transcurso del plazo, se entenderá estimado el mismo si, llegado el plazo de resolución, el órgano administrativo competente no dictase y notificase resolución expresa.
- D. En el caso de actos no expresos, se podrá interponer recurso de alzada desde el día en el que se produzcan los efectos del silencio administrativo. ✓**

Respuesta correcta: Opción D

Justificación:

El régimen del recurso de alzada incluye reglas específicas sobre plazos y efectos del silencio administrativo (art. 122 de la Ley 39/2015). En particular, distingue entre actos expresos y presuntos, estableciendo que en estos últimos el recurso puede interponerse desde el día siguiente al que se produzcan los efectos del silencio. La respuesta correcta es la d), ya que es falsa: el plazo comienza al día siguiente, no el mismo día. Las demás opciones son correctas y reflejan fielmente la regulación legal. La precisión en el cómputo de plazos es esencial en Derecho Administrativo, ya que un error puede provocar la inadmisión del recurso. Además, el silencio positivo en ciertos supuestos refuerza la posición del administrado frente a la inactividad administrativa.

Pregunta 51

El artículo 133 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común regula la consulta pública previa en el proceso de elaboración normativa. ¿Cuál es la diferencia jurídica y funcional entre la "consulta pública previa" y el trámite de "audiencia e información pública" en el iter normativo de la Administración General del Estado?

- A. La consulta pública previa y la audiencia e información pública son trámites equivalentes y sustituibles entre sí: si la Administración realiza uno de ellos, queda exonerada de realizar el otro, dado que ambos persiguen la misma finalidad de recabar la opinión de los ciudadanos antes de aprobar una norma.**

B. La consulta pública previa es un trámite que se realiza antes de que exista texto normativo, con el objetivo de recabar la opinión de los potenciales afectados sobre el problema que la norma pretende resolver y las posibles soluciones; la audiencia e información pública se realiza una vez elaborado el texto, permitiendo a los ciudadanos (directamente o a través de organizaciones representativas) realizar observaciones al contenido concreto del proyecto normativo. Son fases sucesivas y funcionalmente diferenciadas del iter normativo. ✓

C. La consulta pública previa es un trámite exclusivamente digital que se realiza a través de los portales web de los ministerios, mientras que la audiencia e información pública es un trámite presencial que se realiza en sede física; la distinción es puramente procedimental sin implicaciones sustantivas para el contenido de la norma.

D. La consulta pública previa es preceptiva para todos los proyectos normativos sin excepción, mientras que la audiencia e información pública es potestativa y queda a discreción del órgano promotor de la norma, que puede omitirla cuando lo justifique por razones de urgencia o simplificación administrativa.

Respuesta correcta: Opción B

Justificación:

El artículo 133 de la Ley 39/2015 distingue con precisión dos momentos del iter participativo:

(1) Consulta pública previa (art. 133.1): se realiza con carácter previo a la elaboración del texto normativo, recabando la opinión de ciudadanos y organizaciones sobre la necesidad de la norma, los objetivos, las posibles soluciones y el impacto previsible. Es un momento de deliberación sobre el problema y las alternativas, no sobre el texto.

(2) Audiencia e información pública (art. 133.2 y ss.): se realiza una vez elaborado el anteproyecto o proyecto, permitiendo que los interesados formulen observaciones al texto concreto.

Son instrumentos secuenciales y complementarios: primero se delibera sobre el problema (consulta), luego sobre la solución concreta (audiencia). La opción a las equipara y las hace sustituibles, lo cual contradice la lógica del artículo 133. La opción c reduce la distinción a lo digital vs. presencial. La opción d invierte incorrectamente la obligatoriedad de ambos trámites.

Pregunta 52

Las plataformas de participación ciudadana de los ayuntamientos (como Decide Madrid, Decidim Barcelona u otras) han sido señaladas por Naciones Unidas como instrumentos para alcanzar ciudades más abiertas. ¿En qué Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 se enmarca específicamente el fomento de la participación ciudadana a nivel local y cuál es la meta concreta más directamente relacionada?

A. El fomento de la participación ciudadana a nivel local se enmarca en el ODS 16 (Paz, Justicia e Instituciones Sólidas), concretamente en la meta 16.7, que establece la necesidad de garantizar la adopción inclusiva, participativa y representativa de decisiones a todos los niveles, y en la meta 16.6, sobre el desarrollo de instituciones eficaces, responsables y transparentes; las plataformas municipales de participación son instrumentos directos para alcanzar estas metas. ✓

B. El fomento de la participación ciudadana a nivel local se enmarca en el ODS 8 (Trabajo Decente y Crecimiento Económico), concretamente en la meta 8.3 sobre promoción del emprendimiento, dado que las plataformas de participación generan empleo en el sector tecnológico municipal.

C. El fomento de la participación ciudadana a nivel local se enmarca en el ODS 11 (Ciudades y Comunidades Sostenibles) exclusivamente, siendo las plataformas digitales de participación un instrumento específico de la meta 11.3 sobre urbanización inclusiva y sostenible, sin conexión con los ODS relativos a gobernanza e instituciones.

D. El fomento de la participación ciudadana no está recogido en ninguno de los 17 ODS de la Agenda 2030, dado que los ODS se centran en cuestiones medioambientales, económicas y de desarrollo social, sin abordar la gobernanza democrática como objetivo específico.

Respuesta correcta: Opción A

Justificación:

La Agenda 2030 de la ONU incluye la participación ciudadana explícitamente en el ODS 16 (Paz, Justicia e Instituciones Sólidas). Las metas más directamente relacionadas son: la meta 16.6 ("desarrollar instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles") y la meta 16.7 ("garantizar la adopción de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades a todos los niveles"). Las plataformas municipales de participación ciudadana son instrumentos directos para alcanzar la meta 16.7. Adicionalmente, el ODS 11 (meta 11.3) también es relevante para la gobernanza urbana participativa, pero el ODS 16 es el marco principal de gobernanza democrática. La opción b asocia incorrectamente la participación al ODS 8. La opción c restringe exclusivamente al ODS 11. La opción d niega la presencia de la gobernanza en la Agenda 2030, lo cual es manifiestamente incorrecto.

Pregunta 53

Red.es es la entidad pública empresarial responsable de la promoción de datos.gob.es y la iniciativa APORTA. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de Red.es, a qué Ministerio está adscrita y qué papel desempeña en el ecosistema de datos abiertos en España?

A. Red.es es un organismo autónomo con personalidad jurídica propia e independencia funcional, adscrito al Ministerio de Ciencia e Innovación, cuya función principal es financiar proyectos de investigación y desarrollo en tecnologías de la información del sector privado.

B. Red.es es una entidad pública empresarial adscrita al Ministerio de Transformación Digital y Función Pública, que desempeña un papel esencial en la ejecución y despliegue de los planes para la digitalización de España, con el objeto de mejorar los servicios públicos y desarrollar la economía digital; en el ecosistema de datos abiertos, promueve la plataforma datos.gob.es y la iniciativa APORTA. ✓

C. Red.es es una sociedad mercantil estatal participada íntegramente por el Estado, adscrita al Ministerio de Economía, cuya actividad se centra en la gestión de infraestructuras de telecomunicaciones y no tiene competencias en materia de datos abiertos o reutilización de la información del sector público.

D. Red.es es un organismo regulador independiente equiparable a la CNMC, con funciones de supervisión del cumplimiento de las obligaciones de datos abiertos por parte de las Administraciones Públicas, con capacidad para imponer sanciones por incumplimiento de la normativa de reutilización.

Respuesta correcta: Opción B

Justificación:

Red.es es una entidad pública empresarial (en el sentido del artículo 103 de la LRJSP), adscrita al Ministerio de Transformación Digital y Función Pública. Como entidad pública empresarial, se rige principalmente por el Derecho privado en sus actividades, aunque su creación y régimen básico se establecen por normas públicas. Su misión es la ejecución y despliegue de planes de digitalización de España, incluyendo la promoción de datos.gob.es y la iniciativa APORTA. La opción a) la clasifica incorrectamente como organismo autónomo y la adscribe al Ministerio de Ciencia. La opción c) la describe como sociedad mercantil estatal, que es una categoría jurídica distinta de la entidad pública empresarial. La opción d) le atribuye funciones reguladoras y sancionadoras que no tiene.

Pregunta 54

El modelo de conversión del conocimiento de Nonaka (década de 1990) establece que el conocimiento sigue un proceso en espiral con cuatro modos de conversión. ¿Cuál de los siguientes describe CORRECTAMENTE los cuatro modos y su secuencia lógica?

A. Socialización → Combinación → Externalización → Internalización: el conocimiento fluye del tácito al explícito mediante la socialización, luego se combina, se externaliza formalmente y finalmente se interioriza

B. Combinación → Internalización → Socialización → Externalización: el conocimiento explícito preexistente se combina, se interioriza, se socializa y finalmente se formaliza de nuevo en un ciclo cerrado sin progresión en espiral

C. Externalización → Socialización → Internalización → Combinación: el conocimiento debe primero formalizarse antes de poder ser compartido informalmente entre las personas de la organización

D. Socialización (tácito→tácito) → Externalización (tácito→explícito) → Combinación (explícito→explícito) → Internalización (explícito→tácito): el conocimiento sigue una espiral que arranca del conocimiento personal e informal y culmina en nuevo conocimiento tácito enriquecido ✓

Respuesta correcta: Opción D

Justificación:

El modelo SECI de Nonaka y Takeuchi (1995) es uno de los marcos teóricos más influyentes en la gestión del conocimiento. Establece cuatro modos de conversión que siguen una espiral ascendente:

(1) Socialización (tácito→tácito): el conocimiento se transmite entre personas mediante la interacción directa e informal, sin necesidad de codificarlo —aprendizaje por observación, mentoría informal, comunidades de práctica—.

(2) Externalización (tácito→explícito): el conocimiento tácito se articula y formaliza en documentos, manuales, modelos conceptuales o portales del conocimiento.

(3) Combinación (explícito→explícito): el conocimiento explícito existente se combina, reorganiza y sistematiza para generar nuevo conocimiento explícito, apoyándose en data mining o mapas conceptuales.

(4) Internalización (explícito→tácito): el conocimiento explícito se interioriza por las personas, convirtiéndose en nuevo conocimiento tácito enriquecido, apoyándose en plataformas e-learning o motores de búsqueda.

La espiral se inicia de nuevo desde este nuevo conocimiento tácito. Las opciones a), b) y c) proponen secuencias incorrectas.

Pregunta 55

La Compra Pública Innovadora (CPI) es un instrumento de innovación pública con doble objetivo. ¿Cuál es la norma que la regula actualmente y qué la distingue de la compra pública convencional?

- A. La CPI está regulada por la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, que la define como la adquisición de bienes y servicios al precio más bajo posible, introduciendo el criterio del menor coste como factor de innovación en la contratación pública
- B. La CPI está regulada por el Real Decreto de Compra Pública Innovadora de 2020, que la limita a la adquisición de tecnologías de inteligencia artificial y computación cuántica para uso exclusivo de los organismos de seguridad del Estado
- C. La CPI está regulada exclusivamente por Directivas europeas de contratación pública sin trasposición específica al ordenamiento jurídico español, siendo su aplicación voluntaria para los poderes adjudicadores españoles
- D. La CPI está regulada por la Ley 17/2022 que modifica la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, se distingue de la compra convencional en que su objeto es la adquisición de bienes y servicios novedosos que se introducen por primera vez en el mercado, persiguiendo simultáneamente mejorar los servicios públicos y fomentar la innovación empresarial, actuando el sector público como primer cliente de soluciones innovadoras ✓**

Respuesta correcta: Opción D

Justificación:

La Compra Pública Innovadora (CPI) está regulada en España por la Ley 17/2022, de 5 de septiembre, que modifica la Ley 14/2011 de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Se define como la adquisición por parte de los entes públicos de bienes y servicios novedosos que se introducen por primera vez en el mercado. Su rasgo diferencial respecto a la compra pública convencional es su doble objetivo: (1) mejorar los servicios públicos incorporando soluciones innovadoras que aún no existen en el mercado, y (2) fomentar la innovación empresarial, haciendo que el sector público actúe como «primer cliente» de soluciones innovadoras, reduciendo el riesgo para las empresas innovadoras y estimulando así el ecosistema de I+D+i. Esta función de «demand-side innovation policy» es la que distingue a la CPI de la contratación convencional.

Pregunta 56

El Esquema Nacional de Interoperabilidad estructura sus actuaciones en torno a tres dimensiones.

¿Cuál de las siguientes descripciones corresponde CORRECTAMENTE a la dimensión semántica?

- A. Determina los estándares abiertos y protocolos técnicos que garantizan la interoperabilidad de las redes de información públicas, como los formatos de fichero o los protocolos de comunicación
- B. Articula las condiciones organizativas de acceso y utilización de los servicios y datos en formato electrónico puestos a disposición por cada Administración al resto
- C. Establece los datos que las Administraciones Públicas han de tener disponibles para el uso de otras Administraciones, definiendo el significado preciso y el contexto de los datos intercambiados ✓**
- D. Regula los acuerdos de nivel de servicio (SLA) entre Administraciones para garantizar la disponibilidad de los sistemas de intercambio de información

Respuesta correcta: Opción C

Justificación:

El Esquema Nacional de Interoperabilidad (ENI), regulado por el Real Decreto 4/2010, define la interoperabilidad como la capacidad de los sistemas de información y de los procedimientos a los que estos dan soporte para compartir datos y posibilitar el intercambio de información entre administraciones.

Para lograr este objetivo, el ENI se estructura en tres dimensiones fundamentales:

- Dimensión Semántica (La respuesta correcta): Se refiere a asegurar que el significado de la información intercambiada sea entendido de la misma manera por todas las aplicaciones y sistemas involucrados. No basta con mover datos; es necesario que el receptor comprenda exactamente qué significa cada campo y el contexto en el que se usa.
- Dimensión Técnica: Esta se ocupa de los aspectos tecnológicos. Determina los estándares abiertos, protocolos de comunicación, interfaces de red y formatos de fichero que permiten el transporte físico de la información.
- Dimensión Organizativa: Se centra en los procesos de negocio, los acuerdos de nivel de servicio (SLA) y las condiciones de acceso.

Respuestas erróneas:

- Opción A ("estándares abiertos y protocolos técnicos"): Corresponde a la Dimensión Técnica.

- Opción B ("condiciones organizativas de acceso"): Corresponde a la Dimensión Organizativa.
- Opción D ("acuerdos de nivel de servicio - SLA"): Se encuadra también dentro de la Dimensión Organizativa.

Pregunta 57

La Comisión de Estrategia TIC (CETIC) es el máximo órgano de gobernanza TIC de la AGE. ¿Cuál es su naturaleza jurídica y a qué Ministerio está adscrita según el Real Decreto 1125/2024?

- A. Es un organismo autónomo con personalidad jurídica propia, adscrito al Ministerio de Hacienda, con competencias exclusivas en materia de contratación pública de TIC
- B. Es un órgano colegiado interministerial adscrito al Ministerio de Transformación Digital y Función Pública, siendo el máximo responsable de la gobernanza TIC de la AGE ✓**
- C. Es una comisión delegada del Gobierno con rango de órgano constitucional, presidida por el Presidente del Gobierno o el Ministro que este designe
- D. Es un comité técnico asesor sin capacidad decisoria, dependiente funcionalmente de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial

Respuesta correcta: Opción B

Justificación:

La CETIC es un órgano colegiado de carácter interministerial —lo que significa que en él participan representantes de distintos Ministerios— adscrito al Ministerio de Transformación Digital y Función Pública. Su carácter interministerial es coherente con su función de máximo responsable de la gobernanza TIC de toda la AGE, ya que las decisiones sobre estrategia tecnológica afectan a todos los departamentos ministeriales. No es un organismo autónomo con personalidad jurídica propia (opción a), ni una comisión delegada del Gobierno con rango constitucional (opción c), ni un mero órgano asesor sin capacidad decisoria (opción d), pues tiene la función de aprobar la propuesta de Estrategia TIC para su elevación al Consejo de Ministros.

Pregunta 58

Dentro de la estructura de la Administración General del Estado ¿qué órgano ostenta la competencia específica para el diseño e impulso del seguimiento de la reducción de cargas administrativas?

- A. La Secretaría General de Administración Digital.
- B. La Dirección General de Gobernanza Pública. ✓**
- C. La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE).
- D. La Oficina de Calidad Normativa del Ministerio de la Presidencia.

Respuesta correcta: Opción B

Justificación:

La Dirección General de Gobernanza Pública (actualmente encuadrada en la Secretaría de Estado de Función Pública, dentro del Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública) es el órgano de la AGE que tiene legalmente atribuidas las funciones de impulso, coordinación y seguimiento de los planes de simplificación administrativa y reducción de cargas.

Sus funciones clave en este ámbito son:

- Diseño de estrategias: Elabora las directrices para que los Ministerios identifiquen y eliminen trámites innecesarios.
- Seguimiento: Gestiona los indicadores de reducción de cargas para verificar que las medidas de simplificación tienen un impacto real en ciudadanos y empresas.
- Gobernanza: Actúa como el motor de la "Eficacia" administrativa (Art. 103 CE) aplicada a la gestión de procedimientos.

Respuestas erróneas:

- Secretaría General de Administración Digital (SGAD): Su competencia es la técnica y la infraestructura. Se encarga del "continente" (la sede electrónica, la red SARA, la firma digital), pero no del "contenido" jurídico o la decisión política de eliminar una carga administrativa específica.
- Intervención General de la Administración del Estado (IGAE): Su función es el control interno (contable y financiero).
- Oficina de Calidad Normativa (OCN): Ubicada en el Ministerio de la Presidencia, este órgano vela por la calidad de los proyectos de ley y reglamentos antes de su aprobación (evalúa la MAIN), pero no es el órgano encargado del "diseño e impulso del seguimiento" de la reducción de cargas en el conjunto de la Administración ya existente.

Pregunta 59

En la ejecución de una inspección de servicios ¿qué diferencia fundamental existe entre el carácter ordinario y el extraordinario?

- A. La ordinaria requiere autorización del Consejo de Ministros y la extraordinaria del Subsecretario.
- B. La ordinaria se ajusta al plan anual preestablecido y la extraordinaria se realiza por mandato específico ante necesidades sobrevenidas. ✓**
- C. La ordinaria solo afecta a funcionarios y la extraordinaria a personal laboral y directivo.
- D. La ordinaria es siempre pública y la extraordinaria se realiza bajo secreto de sumario judicial.

Respuesta correcta: Opción B

Justificación:

La actividad de las Inspecciones de Servicios en la AGE se rige por los principios de planificación y jerarquía. La distinción entre ambas modalidades radica en su origen y previsibilidad:

Inspección Ordinaria (Carácter Programado):

Su fundamento es la prevención y la mejora continua. Se integra en el Plan Anual de Inspección de cada Departamento Ministerial. Se aprueba habitualmente por el Subsecretario del Ministerio. Busca analizar de forma sistemática el rendimiento, el cumplimiento normativo y la calidad de los servicios de las unidades de forma periódica.

Inspección Extraordinaria (Carácter Reactivo):

No figura en el plan anual. Se activa por órdenes superiores ante hechos que no podían preverse. Motivación: Suele derivar de denuncias, quejas reiteradas de los ciudadanos, sospechas de irregularidades graves, o disfunciones operativas detectadas súbitamente que requieren una intervención inmediata.

Análisis de los no correctos:

- Opción A (Autorizaciones): El Consejo de Ministros no entra en el detalle de autorizar inspecciones de servicios individuales.

- Opción C (Ámbito Subjetivo): La inspección de servicios recae sobre el órgano o unidad administrativa, no sobre la naturaleza del vínculo jurídico del personal.

- Opción D (Publicidad y Secreto): Las inspecciones de servicios son procedimientos administrativos internos. No se rigen por el "secreto de sumario" (concepto procesal penal).

Pregunta 60

La distinción entre "alto cargo" y "directivo público profesional" en la Administración General del Estado responde a lógicas institucionales diferentes. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe CORRECTAMENTE las diferencias fundamentales entre ambas figuras?

- A. El alto cargo es un cargo de especial responsabilidad y relevancia designado con un componente de confianza política que debe respetar el marco jurídico específico del alto cargo (Ley 3/2015), el directivo público profesional es un nexo entre la imparcialidad administrativa y la responsabilidad política que idealmente debería seleccionarse por criterios meritocráticos de competencia profesional, mayor estabilidad y menor dependencia de los ciclos electorales, aunque en España esta figura está escasamente desarrollada en la práctica frente al predominio del modelo de alto cargo de confianza política. ✓**
- B. El alto cargo y el directivo público profesional son figuras jurídicamente equivalentes en el ordenamiento español ya que ambos son designados discrecionalmente por el Gobierno y ambos cesan automáticamente con el cambio de gobierno, siendo la única diferencia entre ellos el nivel retributivo y el rango protocolario que cada uno ocupa en la jerarquía de la Administración General del Estado.
- C. El directivo público profesional es siempre un funcionario de carrera que accede a la dirección exclusivamente mediante concurso de méritos ante una comisión independiente mientras que el alto cargo es siempre un cargo político sin ninguna exigencia de cualificación profesional previa siendo nombrado exclusivamente por razones de lealtad al partido gobernante sin ningún criterio objetivo de idoneidad.
- D. En el sistema español vigente el directivo público profesional está plenamente desarrollado como categoría diferenciada del alto cargo existiendo un estatuto específico del directivo público profesional aprobado por el Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP) que regula de forma detallada su selección, evaluación y cese garantizando su independencia frente a los cambios de gobierno.

Respuesta correcta: Opción A

Justificación:

La distinción entre ALTO CARGO y DIRECTIVO PÚBLICO PROFESIONAL es uno de los debates centrales de la dirección pública española.

ALTO CARGO: cargo de especial responsabilidad y relevancia que solo puede ser desarrollado por personas de contrastada competencia personal y profesional, debe respetar el marco jurídico específico del alto cargo regulado principalmente por la Ley 3/2015 reguladora del ejercicio del alto cargo de la AGE. Su nombramiento tiene un componente de confianza política y cesa con el cambio de gobierno o por decisión del Gobierno.

DIRECTIVO PÚBLICO PROFESIONAL: nexo entre la imparcialidad de la Administración y la responsabilidad política de los cargos electos, definido por profesionalidad, imparcialidad y relaciones con el poder político. Teóricamente debería seleccionarse con mayor base meritocrática y tener mayor estabilidad que el alto cargo.

SITUACIÓN EN ESPAÑA: a diferencia de países como el Reino Unido (Senior Civil Service) o Francia (Haute fonction publique) España tiene escasamente desarrollada la figura del directivo público profesional en la práctica. El TREBEP (RDL 5/2015) menciona al personal directivo pero no desarrolla un estatuto específico, manteniendo el predominio del modelo de alto cargo de designación discrecional.

La opción b) es incorrecta porque equipara ambas figuras cuando tienen naturalezas distintas. La opción c) sobreidealiza la distinción. La opción d) es incorrecta porque España NO tiene desarrollado un estatuto específico del directivo profesional a pesar de la mención en el TREBEP.

Pregunta 61

Según el modelo de Dirección por Objetivos (DPO), ¿cuál es el propósito principal del proceso de retroalimentación denominado "catchball"?

- A. Permitir a la dirección imponer objetivos de forma unilateral sin considerar las capacidades reales de las unidades
- B. Facilitar un proceso bidireccional en el que las unidades y personas retroalimentan a la dirección para adecuar los objetivos a la realidad operativa ✓**
- C. Sustituir la evaluación del desempeño por una autoevaluación anónima de los empleados
- D. Limitar la discrecionalidad de los gestores intermedios en la definición de indicadores de rendimiento

Respuesta correcta: Opción B

Justificación:

En la Administración General del Estado, el catchball permite:

- Alineamiento Vertical: Que lo que decide el Secretario de Estado sea realizable por el Jefe de Área o el Inspector.
- Consenso y Compromiso: Al participar en la definición del objetivo, el empleado público se siente corresponsable del resultado, lo que es clave para la evaluación del desempeño.
- Optimización de Recursos: Permite detectar cuellos de botella técnicos antes de que el objetivo se convierta en una meta inalcanzable.

Respuestas erróneas:

- Opción A (Imposición unilateral): Describe el modelo burocrático tradicional o "autoritario". El catchball nace precisamente para superar esta rigidez, fomentando la participación ascendente (bottom-up).
- Opción C (Autoevaluación anónima): La autoevaluación es una herramienta de la fase de evaluación, mientras que el catchball pertenece primordialmente a la fase de planificación y negociación de objetivos.
- Opción D (Limitar discrecionalidad): Al contrario, el catchball a menudo empodera a los gestores intermedios, dándoles voz para definir indicadores que sean realmente alcanzables.

Pregunta 62

La Ley 40/2015 del Régimen Jurídico del Sector Público (RJSP) incorpora expresamente la planificación y dirección por objetivos como principio general. ¿Cuál es la principal consecuencia práctica de este reconocimiento normativo para las unidades administrativas?

- A. Convierte la DPO en un principio rector que debe guiar la actuación de TODAS las unidades administrativas, dotando de base legal a su implantación ✓**
- B. Obliga exclusivamente a los organismos autónomos a implantar sistemas de DPO, quedando exentos los ministerios de la AGE
- C. Establece que la DPO reemplaza íntegramente al sistema de evaluación del desempeño regulado en el TREBEP
- D. Atribuye a la IGAE la competencia exclusiva para fijar los objetivos de cada unidad en el marco de la gestión presupuestaria

Respuesta correcta: Opción A

Justificación:

La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP), no se limita a regular la estructura orgánica, sino que establece los principios por los que deben regirse todas las Administraciones Públicas en su actuación y relaciones.

El artículo 3.1, apartado h), señala: «Las Administraciones Públicas [...] deberán respetar en su actuación y relaciones [...] h) Planificación y dirección por objetivos y control de los resultados y eficacia de la gestión pública.»

Opciones erróneas:

- Opción b): Es incorrecta porque el artículo 3 de la Ley 40/2015 se aplica a todo el Sector Público, lo que incluye tanto a la Administración General del Estado (Ministerios) como a sus organismos públicos vinculados o dependientes. No hay exención para los Ministerios.
- Opción c): Es una confusión conceptual. La DPO (gestión de la unidad) y la evaluación del desempeño (gestión del individuo regulada en el TREBEP) son herramientas complementarias, no sustitutivas.
- Opción d): La IGAE se encarga del control interno de carácter económico-financiero. La competencia para fijar los objetivos operativos y estratégicos corresponde a los órganos de dirección de cada Departamento Ministerial, no a la Intervención.

Pregunta 63

Respecto a los efectos de la declaración de concurso sobre las facultades de administración del deudor ¿qué régimen se aplica con carácter general en el concurso necesario?

- A. El deudor mantiene sus facultades pero sometidas a la intervención de la administración concursal.
- B. El deudor mantiene plenamente sus facultades sin necesidad de autorización previa.
- C. Se suspende el ejercicio de las facultades del deudor siendo sustituido por la administración concursal. ✓**
- D. Las facultades pasan a ser ejercidas directamente por el Juez de lo Mercantil de forma vitalicia.

Respuesta correcta: Opción C

Justificación:

El régimen de las facultades patrimoniales del deudor tras la declaración de concurso se rige por el principio de desapoderamiento gradual, regulado actualmente en el Texto Refundido de la Ley Concursal (TRLG), aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2020.

La distinción clave: Voluntario vs. Necesario (Art. 106 TRLG)

La ley establece una presunción de mayor o menor confianza en el deudor dependiendo de quién haya solicitado el concurso:

- Concurso Voluntario (solicitado por el deudor): El régimen general es la intervención. El deudor conserva sus facultades de administración y disposición sobre su patrimonio, pero para que sus actos sean válidos requiere la autorización o conformidad de la administración concursal.
- Concurso Necesario (solicitado por un acreedor u otros legitimados): El régimen general es la suspensión. Las facultades de administración y disposición sobre la masa activa se suspenden, y dichas facultades pasan a ser ejercidas por la administración concursal, que actúa en sustitución del deudor.

Opciones falsas:

- Opción A (Intervención): Es el régimen supletorio para el concurso voluntario, no para el necesario.
- Opción B (Plenas facultades): Es incompatible con la propia declaración de concurso.
- Opción D (Juez de forma vitalicia): Es jurídicamente errónea. El Juez no gestiona la empresa y el concurso es un proceso con vocación temporal, nunca vitalicio.

Pregunta 64

En el marco de la Ley 16/2022 ¿qué requisito es indispensable para que un Plan de Reestructuración pueda ser homologado judicialmente con 'arrastre' de acreedores disidentes?

- A. Que el plan sea aprobado por unanimidad de todos los acreedores con derecho a voto.
- B. Que el plan sea informado favorablemente por el Ministerio de Industria y Comercio.
- C. Que el deudor se encuentre en situación de insolvencia actual o inminente o en probabilidad de insolvencia. ✓**
- D. Que el deudor haya cesado su actividad empresarial al menos seis meses antes de la solicitud.

Respuesta correcta: Opción C

Justificación:

La Ley 16/2022 supuso una reforma integral del Texto Refundido de la Ley Concursal (TRLG) para transponer la Directiva (UE) 2019/1023. El objetivo primordial de esta norma es la detección temprana de la crisis empresarial y la continuidad de las unidades productivas viables a través de los Planes de Reestructuración.

Para que un Plan de Reestructuración pueda ser homologado judicialmente deben cumplirse los presupuestos objetivos establecidos en el artículo 614 del TRLG:

Presupuesto Objetivo (El "Estado de Insolvencia"): Solo pueden acogerse a estos planes los deudores que se encuentren en alguna de estas tres situaciones:

1. Probabilidad de insolvencia: Cuando sea objetivamente previsible que, de no alcanzarse un plan, el deudor no podrá cumplir con sus obligaciones que venzan en los próximos dos años.

2. Insolvencia inminente: Cuando el deudor prevea que dentro de los próximos tres meses no podrá cumplir regularmente sus obligaciones.

3. Insolvencia actual: Cuando el deudor ya no puede cumplir regularmente sus obligaciones exigibles.

Respuestas erróneas:

- Unanimidad: La reforma de 2022 busca precisamente evitar que un solo acreedor pueda bloquear una reestructuración beneficiosa para la mayoría.

- Informe del Ministerio de Industria: La homologación de un Plan de Reestructuración es un procedimiento estrictamente judicial ante el Juez de lo Mercantil.

- Cese de actividad: Los Planes de Reestructuración son una herramienta de derecho preventivo.

Pregunta 65

¿Cuál es uno de los motivos estratégicos de la creación del Mercado Alternativo Bursátil (MAB) en España?

A. Sustituir a la Comisión Nacional del Mercado de Valores en la supervisión de las grandes empresas.

B. Fomentar que las PYME se financien exclusivamente mediante créditos comerciales de proveedores.

C. **Crear una fuente de financiación alternativa al crédito bancario para equilibrar el balance de las PYME. ✓**

D. Centralizar las subvenciones públicas destinadas a la I+D+i de las empresas de capital riesgo.

Respuesta correcta: Opción C

Justificación:

El motivo estratégico fundamental del MAB es permitir que estas empresas accedan al capital riesgo y a inversores institucionales/privados mediante la emisión de acciones.

- Financiación vía Fondos Propios: Al captar capital en lugar de deuda, la empresa fortalece su patrimonio neto (balance), reduce su ratio de endeudamiento y mejora su solvencia sin la presión de las cuotas de devolución de un préstamo.

- Visibilidad y Valoración: Estar en un mercado organizado otorga prestigio y una valoración de mercado objetiva, facilitando futuras operaciones corporativas.

Análisis de los fallos:

- Opción A (Sustituir a la CNMV): Es jurídicamente imposible. La CNMV es el supervisor público de todos los mercados de valores en España por mandato legal. El MAB no es para "grandes empresas", sino para PYME y SOCIMI.

- Opción B (Créditos de proveedores): El crédito comercial es una forma de financiación a corto plazo. El MAB busca precisamente lo contrario: capital estable a largo plazo.

- Opción D (Centralizar subvenciones): El MAB es un mercado financiero privado de negociación, no un organismo público gestor de ayudas o subvenciones.

Pregunta 66

¿Cuál es el objetivo primordial de la metodología 'Lean Startup' aplicada al lanzamiento de empresas?

A. Maximizar los stocks intermedios para asegurar el suministro en caso de crisis energética.

B. Eliminar cualquier tipo de desperdicio e invertir recursos masivos antes de conocer al cliente.

C. **Reducir el riesgo en el lanzamiento de nuevos productos mediante el aprendizaje validado y la experimentación. ✓**

D. Fomentar que el emprendedor trabaje solo para evitar la filtración de secretos industriales.

Respuesta correcta: Opción C

Justificación:

La metodología Lean Startup, popularizada por Eric Ries, traslada los principios del Lean Manufacturing (nacidos en la optimización de procesos de Toyota) al ámbito del emprendimiento y el desarrollo de productos bajo condiciones de incertidumbre extrema.

Su esencia no es el ahorro por el ahorro, sino la eficiencia en el aprendizaje:

- Aprendizaje Validado: El objetivo no es diseñar un producto perfecto en un laboratorio, sino formular hipótesis sobre el modelo de negocio y someterlas a prueba con clientes reales de forma iterativa.

- Ciclo Construir-Medir-Aprender: El fin primordial es minimizar el tiempo total que se tarda en recorrer este bucle, evitando el desarrollo de funciones o productos que el mercado no valora.

- Producto Mínimo Viable (MVP): Se utiliza para lanzar la versión más rudimentaria del producto que permita recoger el máximo de información sobre el comportamiento del consumidor con el menor esfuerzo y gasto de recursos.

Opciones erróneas:

- Maximizar stocks (Opción 1): Es el antítesis del concepto Lean. La filosofía original busca el Just-in-Time y la eliminación de inventarios ociosos.

- Invertir recursos masivos antes de conocer al cliente (Opción 2): Esto describe el modelo tradicional de "planificación rígida" o Waterfall.
- Trabajar solo por secretos industriales (Opción 4): La metodología propugna el "salir del edificio" (Get out of the building). El feedback temprano es mucho más valioso que el aislamiento.

Pregunta 67

¿Cuál es la ventaja estratégica de ejecutar una 'Desinversión' al comienzo de la fase de declive?

- A. Permite a la empresa integrarse verticalmente con sus proveedores más ineficientes.
- B. Maximiza el precio de venta de la unidad de negocio o de los activos tangibles. ✓**
- C. Garantiza que el sector recupere su tasa de crecimiento promedio de la economía.
- D. Evita que la empresa tenga que realizar un análisis de su posición competitiva.

Respuesta correcta: Opción B

Justificación:

La decisión de desinvertir se basa en la ventana de oportunidad.

Al inicio de la fase de declive, la caída de la demanda aún no es drástica o no ha sido plenamente internalizada por todos los actores del mercado. Ejecutar la desinversión en este punto ofrece ventajas críticas:

- Mayor valor de rescate: Los activos tangibles (maquinaria, instalaciones) aún tienen una vida útil remanente considerable y no han quedado obsoletos tecnológicamente.
- Valor del fondo de comercio (Goodwill): La marca y la cartera de clientes todavía retienen valor para un competidor que busque una estrategia de "Liderazgo" o "Nicho" en el sector decadente.
- Evitar la guerra de precios: Si la empresa espera a que el declive sea evidente, se enfrentará a una salida costosa debido a las barreras de salida y a la caída estrepitosa de los márgenes.

Análisis de los Distractores:

- Opción A (Integración vertical con proveedores ineficientes): La desinversión busca precisamente liberar recursos de áreas no rentables.
- Opción C (Garantizar la recuperación del sector): La decisión individual de una empresa no tiene el poder de revertir las fuerzas macroeconómicas que causan el declive de un sector entero.
- Opción D (Evitar el análisis de la posición competitiva): Todo lo contrario. Una desinversión exitosa es el resultado de un análisis riguroso que determina que la posición competitiva es insostenible a largo plazo.

Pregunta 68

¿Qué se entiende por 'Efecto Experiencia' y cuál es su principal consecuencia estratégica en la madurez?

- A. El aumento del prestigio de la marca que permite subir los precios un 20% anual.
- B. La acumulación de formación que obliga a la empresa a rotar a todo su personal directivo.
- C. La disminución del coste real del valor añadido total de la empresa en términos unitarios. ✓**
- D. La reducción de la competitividad debido al estancamiento de las técnicas de fabricación.

Respuesta correcta: Opción C

Justificación:

A diferencia del aprendizaje (solo mano de obra), la experiencia abarca toda la organización (logística, compras, administración). Al acumular experiencia, el coste unitario del valor añadido baja, creando una barrera de entrada formidable para nuevos competidores que no tienen ese histórico de eficiencia.

Pregunta 69

¿Qué funciones empresariales son las más susceptibles de ser deslocalizadas debido a su menor valor añadido relativo?

- A. Las funciones de dirección, gestión general y las actividades de diseño estratégico.
- B. Las tareas de I+D+i y el marketing estratégico de posicionamiento global.
- C. Las funciones de administración y las etapas productivas de menor rango como el ensamblaje. ✓**
- D. La planificación financiera y la gestión de la propiedad industrial de la matriz.

Respuesta correcta: Opción C

Justificación:

El manual establece una jerarquía funcional. Mientras que las actividades estratégicas (dirección, I+D, diseño) suelen mantenerse en la sede matriz (ciudades globales desarrolladas), las tareas de producción y soporte administrativo básico son las más fácilmente repartidas por el mapa al requerir menor cualificación y aportar menos valor diferencial.

Pregunta 70

Dentro de los riesgos de la deslocalización, ¿qué es el 'Coste Total de Propiedad' (Total Cost of Ownership - TCO)?

- A. El precio de compra inicial de la maquinaria industrial en el país de destino.
- B. La suma del precio del producto más todos los costes indirectos como transporte, aranceles y riesgos de calidad. ✓**
- C. La valoración contable de los activos intangibles de la empresa en el mercado de valores.
- D. El coste asociado exclusivamente al despido de los trabajadores en el país de origen.

Respuesta correcta: Opción B

Justificación:

Al evaluar la deslocalización, las empresas a menudo cometen el error de mirar solo el salario horario. El TCO obliga a considerar costes ocultos: logística transoceánica, inventarios en tránsito, costes de coordinación, riesgos de propiedad intelectual y posibles defectos de calidad que pueden anular el ahorro inicial.

Pregunta 71

En el Impuesto sobre Sociedades, ¿cuál es el método general para determinar la base imponible según la Ley 27/2014?

- A. La diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente al cierre del ejercicio fiscal debidamente auditado.
- B. El resultado contable corregido mediante la aplicación de los ajustes extracontables (positivos o negativos) previstos en la ley. ✓**
- C. La suma de todos los ingresos de explotación minorada exclusivamente por los gastos de personal y seguridad social.
- D. La aplicación directa de los coeficientes de caja aprobados por el Ministerio de Hacienda sobre el volumen de facturación bruta.

Respuesta correcta: Opción B

Justificación:

El Impuesto sobre Sociedades parte del resultado contable (determinado según el Plan General Contable). Sobre este resultado se aplican los "ajustes extracontables" para salvar las diferencias entre los criterios contables y las normas fiscales (por ejemplo, diferencias en amortizaciones, gastos no deducibles o exenciones).

Pregunta 72

La clasificación de los tributos en el ordenamiento jurídico español distingue entre impuestos, tasas y contribuciones especiales. ¿Cuál es el criterio fundamental que diferencia un impuesto de una tasa desde el punto de vista jurídico-tributario?

- A. En el impuesto no existe contraprestación individualizada a favor del contribuyente: se exige por la realización de un hecho imponible que pone de manifiesto capacidad económica sin que el pago dé derecho a ningún servicio específico. En la tasa existe una actividad administrativa o un uso del dominio público que beneficia directamente al sujeto pasivo ✓**
- B. El impuesto es gestionado exclusivamente por la Administración General del Estado mientras que las tasas pueden ser exigidas por cualquier nivel de la Administración pública incluyendo municipios y comunidades autónomas
- C. El impuesto es siempre de carácter periódico y recurrente mientras que la tasa es un tributo instantáneo que se devenga en un único momento temporal sin posibilidad de repetición en ejercicios sucesivos
- D. El impuesto grava exclusivamente a las personas jurídicas y empresas mientras que las tasas recaen únicamente sobre las personas físicas en su condición de usuarios individuales de los servicios públicos

Respuesta correcta: Opción A

Justificación:

El artículo 2 de la Ley 58/2003, General Tributaria, define los tres tipos de tributos:

- (1) Impuestos: tributos exigidos sin contraprestación, cuyo hecho imponible está constituido por negocios, actos o hechos que ponen de manifiesto la capacidad económica del contribuyente (renta, patrimonio, consumo). No existe ningún vínculo entre el pago del impuesto y la obtención de un beneficio individualizado del sector público.
- (2) Tasas: tributos cuyo hecho imponible consiste en la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público, o en la prestación de servicios o la realización de actividades en régimen de derecho público que se refieran, afecten o beneficien de modo particular al obligado tributario. Existe una contraprestación individualizada.
- (3) Contribuciones especiales: tributos cuyo hecho imponible consiste en la obtención de un beneficio o aumento de valor de los bienes del obligado tributario como consecuencia de la realización de obras públicas o del establecimiento o ampliación de servicios públicos.

Pregunta 73

¿Cuál es la diferencia fundamental entre la 'Delegación' y la 'Descentralización' en una organización industrial?

- A. La delegación es el reparto permanente de la autoridad, mientras que la descentralización es un acto temporal del directivo hacia un subordinado.
- B. La delegación es una transferencia de tareas de ejecución, mientras que la descentralización implica únicamente la externalización de servicios (outsourcing).
- C. La delegación es un proceso individual de transferencia de autoridad y responsabilidad, mientras que la descentralización es una característica del diseño organizativo que distribuye el poder de decisión por toda la estructura. ✓**
- D. La delegación aumenta el tramo de control, mientras que la descentralización lo reduce drásticamente para mejorar la supervisión directa.

Respuesta correcta: Opción C

Justificación:

La delegación es la concesión de autoridad de un superior a un subordinado específico para realizar una tarea. La descentralización es una política organizativa: cuanto más se permite que las decisiones se tomen en los niveles bajos de la jerarquía de forma sistemática, más descentralizada está la organización.

Pregunta 74

En el caso de la importación de una máquina industrial proveniente de Estados Unidos, ¿quién es el sujeto pasivo del IVA y dónde se liquida el impuesto?

- A. El sujeto pasivo es el exportador estadounidense y se liquida en el país de origen.
- B. El sujeto pasivo es la aduana española, que debe emitir una factura de ingresos públicos al importador.
- C. El sujeto pasivo es el importador español y el impuesto se devenga en el momento de la entrada de la mercancía en el territorio aduanero. ✓**
- D. La operación está no sujeta al IVA por tratarse de un bien de equipo necesario para la reindustrialización del Estado.

Respuesta correcta: Opción C

Justificación:

En las importaciones (bienes provenientes de fuera de la UE), el hecho imponible se produce por la entrada de los bienes en el territorio de aplicación del impuesto. El importador es el sujeto pasivo y debe liquidar el IVA ante la Aduana (mediante el DUA), a menos que esté acogido al régimen de diferimiento del IVA a la importación en su declaración periódica.

Pregunta 75

Tras la Ley 18/2022 de creación y crecimiento de empresas, ¿qué mecanismo protege a acreedores cuando el capital de la S.L. es inferior a 3.000 €?

- A. Seguro obligatorio de responsabilidad
- B. Aval personal de administradores
- C. Depósito notarial anual
- D. Reserva legal del 20% del beneficio hasta alcanzar 3.000 € ✓**

Respuesta correcta: Opción D

Justificación:

La Ley 18/2022 modificó el artículo 4 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital (LSC) para permitir la constitución de una S.L. con un capital social mínimo de 1 euro, eliminando la barrera anterior de los 3.000 €.

No obstante, para garantizar la solvencia frente a terceros y proteger a los acreedores ante sociedades con una capitalización tan exigua, el legislador impuso dos salvaguardas específicas (Art. 4.2 LSC):

1. Dotación de la Reserva Legal: Mientras el capital social no alcance la cifra de 3.000 euros, la sociedad debe destinar obligatoriamente a la reserva legal una cifra al menos igual al 20% del beneficio de cada ejercicio, sin límite temporal hasta que la suma de la reserva y el capital social alcance dicho importe.

2. Responsabilidad Solidaria en caso de Liquidación: Si la sociedad entrara en liquidación y el patrimonio fuera insuficiente para atender las deudas, los socios responderán solidariamente de la diferencia entre el capital suscrito y la cifra de 3.000 euros.

Respuestas erróneas:

- Opción A (Seguro obligatorio): No es un requisito legal vinculado a la cuantía del capital social mínimo en la LSC.

- Opción B (Aval personal): La ley no exige un aval personal automático por el hecho de tener bajo capital.

- Opción C (Depósito notarial): No existe tal figura en la reforma.

Pregunta 76

¿Cuál es la función estratégica de la 'Physical Evidence' (Evidencia Física) en el marketing de servicios?

- A. Proporcionar soporte físico para que el cliente pueda evaluar la calidad de un servicio intangible. ✓**
- B. Automatizar todos los procesos de atención al cliente mediante inteligencia artificial.
- C. Garantizar que no existan desviaciones en la conducta del personal de ventas.
- D. Reducir el coste total de propiedad para el cliente industrial.

Respuesta correcta: Opción A

Justificación:

La respuesta correcta es la "a". Al ser el servicio invisible, las instalaciones o uniformes ayudan a "tangibilizar" la oferta para dar seguridad al cliente.

Pregunta 77

Según la Teoría de la Estructura de Capital basada en los Costes de Agencia (Jensen y Meckling), ¿qué efecto positivo puede tener el endeudamiento sobre la gestión directiva?

- A. Reduce el riesgo de quiebra al aumentar la liquidez disponible.
- B. Elimina la necesidad de auditorías externas anuales.
- C. Actúa como un mecanismo de control o disciplina, obligando a los directivos a ser más eficientes para cumplir con los pagos de intereses. ✓**
- D. Aumenta los fondos de libre disposición para que los directivos acometan proyectos de crecimiento.

Respuesta correcta: Opción C

Justificación:

La respuesta correcta es la c). Jensen y Meckling argumentan que el endeudamiento genera una "disciplina de mercado". Al estar obligada la empresa a pagar intereses y devolver el principal, los directivos tienen menos "flujo de caja libre" (Free Cash Flow) para malgastar en beneficios personales o proyectos poco rentables. La presión de cumplir con las obligaciones de la deuda les obliga a ser más eficientes y a tomar decisiones que maximicen el valor de la empresa para evitar la insolvencia.

Análisis de las opciones incorrectas:

a) Falsa: Es justo lo contrario. El endeudamiento aumenta el riesgo de quiebra (costes de insolvencia financiera) debido a las obligaciones fijas de pago.

b) Falsa: De hecho, la deuda suele aumentar la necesidad de supervisión y auditorías para que los acreedores estén tranquilos sobre el uso de los fondos.

d) Falsa: El endeudamiento reduce los fondos de libre disposición. Precisamente, uno de los problemas de agencia es que los directivos prefieren tener mucho efectivo libre para invertir en proyectos que aumenten su poder ("construcción de imperios"), aunque no sean rentables. La deuda les quita ese exceso de dinero.

Pregunta 78

¿Cuál es el número mínimo de socios necesario para constituir una Sociedad Anónima en España?

- A. Tres socios como mínimo
- B. Dos socios como mínimo
- C. No se exige un número mínimo de socios, pudiendo constituirse con un único socio ✓**

D. Cinco socios como mínimo

Respuesta correcta: Opción C

Justificación:

La Ley de Sociedades de Capital establece que el número mínimo de socios para constituir una S.A. es de uno, pudiendo ser por tanto unipersonal desde su constitución. Cuando la S.A. tiene un único accionista, debe denominarse Sociedad Anónima Unipersonal e indicarlo expresamente en toda su documentación, debiendo inscribirse además la condición de unipersonal en el Registro Mercantil. La pérdida de dicha condición también debe ser objeto de inscripción registral. Esta posibilidad de constituir sociedades unipersonales facilita la estructuración de grupos empresariales y la organización de filiales.

Pregunta 79

En materia de distribución de resultados en una Cooperativa, ¿cuál es el destino obligatorio de los excedentes netos obtenidos en cada ejercicio económico, según establece la Ley 27/1999?

- A. Los excedentes deben repartirse íntegramente entre los socios en proporción al capital aportado por cada uno
- B. Una parte de los excedentes debe destinarse obligatoriamente al Fondo de Reserva Obligatorio y al Fondo de Educación y Promoción Cooperativa, pudiendo repartirse el resto entre los socios en forma de retorno cooperativo ✓**
- C. Los excedentes deben reinvertirse íntegramente en la actividad cooperativa, estando prohibido cualquier reparto entre los socios
- D. Los excedentes se destinan en su totalidad a una reserva irreplicable que permanece en la cooperativa de forma permanente

Respuesta correcta: Opción B

Justificación:

La Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas, establece un régimen de distribución de resultados singular que busca equilibrar la solvencia de la entidad, su función social y el beneficio del socio. Dotaciones Obligatorias (Art. 58): Antes de considerar cualquier reparto, de los excedentes netos se deben detraer los porcentajes destinados a los fondos sociales. Específicamente, como mínimo el 20% debe ir al Fondo de Reserva Obligatorio (FRO) y el 5% al Fondo de Educación y Promoción (FEP), hasta que el FRO alcance ciertos límites. Disponibilidad (Art. 58.3): Una vez cubiertas estas dotaciones legales y los impuestos, el sobrante se denomina "excedente disponible", el cual puede ser destinado a retorno cooperativo para los socios, a reservas voluntarias o a inversiones.

Pregunta 80

Dentro de un sistema de gestión de calidad basado en la mejora continua, el Ciclo PDCA (Plan-Do-Check-Act) establece que la fase de "Act" (Actuar) consiste en:

- A. Realizar el trabajo físico según lo planificado inicialmente.
- B. Monitorizar los procesos y medir los resultados respecto a los objetivos.
- C. Tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño de los procesos basándose en los resultados de la verificación. ✓**
- D. Documentar únicamente los fallos críticos para el Consejo de Administración.

Respuesta correcta: Opción C

Justificación:

La respuesta correcta es la "c". La fase "Act" (Actuar) es la cuarta y última etapa del ciclo, pero a su vez la que reinicia el proceso:

- Su objetivo es cerrar la brecha entre lo planificado y lo ejecutado.
- Si tras la verificación ("Check") se detectan desviaciones, en esta fase se aplican acciones correctivas.
- Si se han cumplido los objetivos, se estandarizan las mejoras para que el nuevo nivel de desempeño sea el punto de partida del siguiente ciclo de planificación.

La "a" es "Do", la "b" es "Check" y la "d" es una visión burocrática incompleta que no define la mejora continua.

Pregunta 81

Según la Teoría de la Jerarquía Financiera (Pecking Order Theory) de Myers y Majluf (1984), ¿cuál es el orden de preferencia de una empresa para financiar sus proyectos?

- A. 1º Ampliación de capital, 2º Deuda bancaria, 3º Reservas internas.
- B. 1º Deuda convertible, 2º Subvenciones públicas, 3º Autofinanciación.
- C. 1º Autofinanciación (recursos internos), 2º Emisión de deuda (recursos ajenos), 3º Ampliación de capital (recursos propios externos). ✓**
- D. 1º Créditos comerciales, 2º Reservas, 3º Emisión de bonos.

Respuesta correcta: Opción C

Justificación:

La respuesta 'c' es la correcta. La Teoría del Pecking Order se basa en la existencia de asimetrías informativas entre los gestores de la empresa y los inversores externos. El orden lógico de preferencia es:

1. Autofinanciación: Es la opción más barata y discreta; no revela información estratégica ni requiere costes de emisión.
2. Deuda: Si los recursos internos son insuficientes, se recurre a la deuda. Los inversores la perciben como una señal de confianza (la empresa cree que puede devolver el capital con intereses).
3. Ampliación de Capital: Es el último recurso. El mercado suele interpretar una emisión de acciones como una señal de que estas están sobrevaloradas o que la empresa tiene problemas de solvencia, provocando una caída en el precio de la cotización (problema de selección adversa).

Pregunta 82

¿Qué características debe reunir un recurso para ser fuente de una ventaja competitiva sostenible según el marco VRIO de Barney?

- A. Que sea Valioso, Raro (escaso), difícil de Imitar y que la Organización esté preparada para explotarlo. ✓**
- B. Que sea Visible, Rentable, Industrial y Operativo para la cadena de montaje.
- C. Que tenga un Valor contable neto superior al pasivo exigible de la empresa industrial.
- D. Que sea Versátil, Rápido, Internacional y Optimizado por algoritmos de inteligencia artificial.

Respuesta correcta: Opción A

Justificación:

El modelo VRIO fue desarrollado por Jay Barney como una evolución del Enfoque Basado en los Recursos (RBV). Para que un recurso proporcione una ventaja competitiva sostenible en el tiempo, debe superar cuatro filtros:

- V (Valuable): El recurso debe permitir a la empresa explotar una oportunidad o neutralizar una amenaza.
- R (Rare): Debe estar en manos de muy pocos competidores.
- I (Inimitable): Debe ser costoso de imitar, ya sea por condiciones históricas únicas, ambigüedad causal o complejidad social.
- O (Organization): La empresa debe poseer procesos, estructuras y sistemas organizativos capaces de extraer el potencial de los tres puntos anteriores.

Pregunta 83

En el ámbito de la ejecución estratégica, ¿qué representa el cuadro de mando integral o 'Balanced Scorecard' (BSC)?

- A. Un estado contable que refleja el saldo de caja y bancos al cierre del ejercicio industrial.
- B. Una herramienta que traduce la visión y la estrategia en un conjunto coherente de indicadores en cuatro perspectivas. ✓**
- C. Un panel de control físico situado en la sala de máquinas para monitorizar la presión de las calderas.
- D. El registro de patentes y marcas que la empresa posee en la oficina de propiedad intelectual.

Respuesta correcta: Opción B

Justificación:

Respuesta Correcta: "Una herramienta que traduce la visión y la estrategia en un conjunto coherente de indicadores en cuatro perspectivas."

El Balanced Scorecard, desarrollado por Kaplan y Norton, es el estándar de oro en la gestión estratégica. Su potencia reside en que no se limita a mirar el pasado (indicadores financieros), sino que equilibra la gestión mediante cuatro perspectivas interconectadas:

- Financiera: ¿Cómo nos ven los accionistas?
- Cliente: ¿Cómo nos ven los clientes?
- Procesos Internos: ¿En qué debemos ser excelentes?
- Aprendizaje y Crecimiento: ¿Podemos continuar mejorando y creando valor? (Capital humano y sistemas).

Pregunta 84

En la metodología Seis Sigma (Six Sigma) aplicada a la calidad industrial, el objetivo técnico es reducir la variabilidad de los procesos hasta alcanzar un máximo de:

- A. 3,4 defectos por cada millón de oportunidades (DPMO). ✓
- B. Un 5% de productos defectuosos sobre el total de la producción diaria.
- C. 10 errores por cada lote de producción estratégica.
- D. Cero defectos absolutos, eliminando la necesidad de inspección estadística.

Respuesta correcta: Opción A

Justificación:

La respuesta correcta es la "a". Seis Sigma es una metodología estadística cuyo rigor busca que el proceso sea tan estable que solo se produzcan 3,4 fallos por millón. La "b" y "c" son niveles de calidad muy inferiores. La "d" es un objetivo ideal del JIT ("cero defectos"), pero Seis Sigma admite una tolerancia estadística mínima calculada.

Pregunta 85

Si el ROI se duplica y el margen es constante, ¿qué ocurrió con la rotación?

- A. Se duplicó ✓
- B. Se mantuvo
- C. Se redujo a la mitad
- D. Se cuadruplicó

Respuesta correcta: Opción A

Justificación:

Al ser $ROI = \text{Margen} \times \text{Rotación}$, si el margen es constante, el ROI es proporcional a la rotación.

Pregunta 86

Dentro de los recursos intangibles, ¿cuál se considera el más difícil de transferir y valorar económicamente?

- A. El capital humano y el conocimiento tácito acumulado por el equipo de ingeniería. ✓
- B. El parque de maquinaria de control numérico computarizado (CNC) de la planta.
- C. Los terrenos y naves industriales donde se ubica la actividad productiva.
- D. El saldo de tesorería y las líneas de crédito concedidas por entidades bancarias.

Respuesta correcta: Opción A

Justificación:

La respuesta "a" es correcta. El conocimiento tácito (lo que los empleados saben pero no está escrito en manuales) es el recurso más complejo de replicar o mover. La "b" y "c" son recursos tangibles y la "d" es recurso financiero, ambos fácilmente valorables y transferibles.

Pregunta 87

Según la teoría del 'Capital Humano' de Gary Becker, ¿qué caracteriza a la 'Formación Específica' frente a la 'Formación General'?

- A. La formación específica solo sirve en la empresa que la imparte, mientras que la general aumenta la productividad en cualquier organización. ✓
- B. La formación general la pagan los sindicatos y la específica el Ministerio de Industria.
- C. La formación específica se refiere exclusivamente a la prevención de riesgos laborales.
- D. La formación general es obligatoria para los ingenieros y la específica para el personal administrativo.

Respuesta correcta: Opción A

Justificación:

La respuesta "a" es correcta. La formación específica crea un vínculo de dependencia, ya que su valor se pierde fuera de la empresa actual.

Pregunta 88

¿En qué fase del proceso de cálculo del coste final en el modelo ABC se emplean los inductores de coste o "cost-drivers"?

- A. Exclusivamente en la fase de localización de costes indirectos en los centros de responsabilidad.
- B. Únicamente para repartir los costes directos de materia prima entre los productos.
- C. Solo en la etapa inicial de diseño del mapa de actividades para entrevistar a los responsables.
- D. En dos fases: para asignar costes a las actividades y para imputar el coste de estas al producto final. ✓**

Respuesta correcta: Opción D

Justificación:

Respuesta Correcta: "En dos fases: para asignar costes a las actividades y para imputar el coste de estas al producto final." El modelo ABC (Activity Based Costing) parte de la premisa de que los productos no consumen costes, sino que los productos consumen actividades y las actividades consumen recursos. El inductor de coste o cost-driver es la unidad de medida que explica la relación causal. Su empleo es dual:

- Fase 1 (Recursos → Actividades): Se utilizan inductores de recursos para asignar el gasto (ej. nóminas, luz) a cada actividad (ej. diseño, control de calidad).
- Fase 2 (Actividades → Productos/Servicios): Se utilizan inductores de actividad (ej. número de órdenes, horas de preparación) para imputar el coste acumulado en la actividad al objeto de coste final.

Pregunta 89

El modelo tradicional del marketing mix (4P), que combina variables controlables para satisfacer al mercado, fue propuesto originalmente en 1960 por:

- A. Philip Kotler.
- B. Robert F. Lauterborn.
- C. Neil H. Borden.
- D. E. Jerome McCarthy. ✓**

Respuesta correcta: Opción D

Justificación:

Respuesta Correcta: "E. Jerome McCarthy." Aunque el concepto de "marketing mix" fue acuñado originalmente por Neil H. Borden en la década de los 50, fue E. Jerome McCarthy quien, en su libro Basic Marketing: A Managerial Approach (1960), simplificó y organizó el modelo en las cuatro categorías clásicas que conocemos hoy: Product (Producto), Price (Precio), Place (Distribución) y Promotion (Promoción/Comunicación). Justificación de por qué las otras opciones son incorrectas:

- "Philip Kotler": Es probablemente el error más común. Kotler es el gran divulgador y la figura más influyente del marketing moderno, pero él adoptó y popularizó el modelo de McCarthy en sus textos posteriores. No fue el autor original de las 4P.
- "Robert F. Lauterborn": Lauterborn propuso en 1990 el modelo de las 4C (Consumer, Cost, Convenience, Communication), que es una evolución del marketing mix centrada en el cliente.
- "Neil H. Borden": Borden acuñó el término "Marketing Mix" pero su lista original incluía hasta 12 variables. Fue McCarthy quien sintetizó esta lista en las 4P en 1960.

Pregunta 90

De acuerdo con la Tesis de Irrelevancia de Modigliani y Miller (Proposición I) en ausencia de impuestos, ¿por qué el valor de una empresa endeudada es igual al de una no endeudada?

- A. Porque el coste de la deuda es siempre igual al coste del capital propio en mercados perfectos.
- B. Porque el arbitraje de los inversores iguala el valor de ambos flujos de caja independientemente de cómo se repartan entre deuda y capital. ✓**
- C. Porque el escudo fiscal de la deuda compensa exactamente el incremento del riesgo financiero.
- D. Porque la rentabilidad esperada de los activos disminuye proporcionalmente al aumentar el ratio de deuda.

Respuesta correcta: Opción B

Justificación:

Respuesta Correcta: "Porque el arbitraje de los inversores iguala el valor de ambos flujos de caja independientemente de cómo se repartan entre deuda y capital." La Proposición I de M&M (1958) establece que, en mercados perfectos y sin impuestos, el valor de mercado de una empresa es independiente de su estructura de capital. El argumento central es el proceso de arbitraje:

Si una empresa endeudada tuviera un valor superior a una no endeudada con los mismos activos, los inversores venderían las acciones de la empresa cara y comprarían las de la barata, utilizando el "apalancamiento casero" (endeudándose a nivel personal). Este flujo de capital continuaría hasta que los precios se igualaran.

Justificación de por qué las otras opciones son incorrectas:

- Opción A: Es falso. El capital propio siempre es más caro que la deuda porque el accionista asume un riesgo residual mayor.
- Opción C (trampa): El enunciado especifica "en ausencia de impuestos". Si no hay impuestos, no existe el escudo fiscal.
- Opción D: Incorrecto. La rentabilidad de los activos depende de la eficiencia operativa y del mercado, no de la estructura de financiación.

Pregunta 91

En la gestión de decisiones sobre dividendos, ¿cuál es el objetivo fundamental de buscar un equilibrio entre reparto y retención?

- A. Maximizar el volumen de impuestos pagados por la sociedad en el ejercicio corriente.
- B. Garantizar que el capital social sea siempre superior a las reservas voluntarias.
- C. Maximizar el valor de la empresa, equilibrando la rentabilidad inmediata del accionista con el crecimiento futuro. ✓**
- D. Eliminar por completo la necesidad de recurrir a financiación ajena a corto plazo.

Respuesta correcta: Opción C

Justificación:

La respuesta correcta es la 'c'. Las decisiones sobre dividendos deben balancear la satisfacción del accionista (dividendo) con la capacidad de autofinanciación (retención) para generar valor a largo plazo. La 'a' no es un objetivo financiero. La 'b' es una cuestión contable/legal secundaria. La 'd' es un extremo poco eficiente, ya que la deuda puede ser beneficiosa para la estructura de capital.

Pregunta 92

¿Qué figura jurídica permite al Empresario Individual limitar parcialmente su responsabilidad respecto a su vivienda habitual, y bajo qué condiciones?

- A. La figura del Administrador Único, siempre que inscriba su empresa en el Registro de la Propiedad
- B. La figura del Emprendedor de Responsabilidad Limitada, regulada por la Ley 14/2013, que permite excluir la vivienda habitual de la responsabilidad empresarial siempre que su valor no supere los 300.000 euros y no esté afecta a la actividad ✓**
- C. La figura del Empresario Colectivo, que permite compartir la responsabilidad entre varios empresarios individuales
- D. La constitución de una Unión Temporal de Empresas (UTE) con otro empresario individual

Respuesta correcta: Opción B

Justificación:

La Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, introdujo la figura del Emprendedor de Responsabilidad Limitada (ERL), que permite al empresario autónomo excluir su vivienda habitual de la responsabilidad derivada de su actividad empresarial o profesional, siempre que se cumplan dos condiciones: que la vivienda no esté afecta a la actividad empresarial y que su valor no supere los 300.000 euros. Para beneficiarse de esta protección, el empresario debe inscribirse en el Registro Mercantil con los datos correspondientes al bien inmueble que pretende excluir, y debe hacer constar su condición de ERL en toda su documentación.

Pregunta 93

¿En qué régimen de la Seguridad Social debe darse de alta obligatoriamente el Empresario Individual para el ejercicio de su actividad?

- A. En el Régimen General de la Seguridad Social, en igualdad de condiciones que cualquier trabajador por cuenta ajena
- B. En el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) ✓**
- C. En el Régimen Especial de la Minería del Carbón
- D. En el Régimen Especial de Trabajadores del Mar

Respuesta correcta: Opción B

Justificación:

El Empresario Individual, en su condición de trabajador autónomo, debe darse de alta obligatoriamente en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), gestionado por la Seguridad Social. En este régimen, el empresario elige su base de cotización y paga las cuotas correspondientes, que determinan sus prestaciones futuras. Históricamente han existido diferencias significativas entre las prestaciones del RETA y las del Régimen General, siendo generalmente inferiores las del primero, aunque en los últimos años se han producido mejoras importantes en la equiparación de ambos regímenes, especialmente en materia de prestaciones por cese de actividad y protección social.

Pregunta 94

En los procesos de producción conjunta, ¿cuál es la definición técnica del denominado "Punto de Separación" (Split-off point)?

- A. El momento del proceso productivo en el que los productos individuales se vuelven identificables por separado. ✓**
- B. El punto en el que el valor de mercado de los subproductos iguala a sus costes de procesamiento adicional.
- C. La fase en la que se decide eliminar las actividades que no añaden valor según el modelo ABC.
- D. El instante en el que los costes comunes se transforman en costes directos de un solo producto final.

Respuesta correcta: Opción A**Justificación:**

Respuesta Correcta: "El momento del proceso productivo en el que los productos individuales se vuelven identificables por separado."

En la contabilidad de costes industriales, la producción conjunta ocurre cuando un mismo proceso o materia prima genera simultáneamente varios productos (coproductos y subproductos).

- Definición: El Punto de Separación es el hito físico o temporal donde el flujo de producción común cesa y emergen productos con identidad propia.

- Implicación contable: Hasta ese punto, todos los costes incurridos son costes conjuntos e indivisibles de forma natural. A partir de aquí, cualquier coste adicional es un coste de procesamiento autónomo o específico de cada producto.

Justificación de por qué las otras opciones son incorrectas:

- Opción B: Esta descripción se relaciona con la decisión de "vender o procesar más", pero no define el punto de separación. Se refiere al punto de equilibrio marginal de un subproducto, no al momento de su aparición física.

- Opción C: Mezcla conceptos. La eliminación de actividades que no añaden valor es una técnica de gestión (ABM), pero es totalmente ajena a la naturaleza física y técnica de la producción conjunta.

- Opción D: Aunque es una interpretación intuitiva, es técnicamente imprecisa. Los costes conjuntos nunca se "transforman" en directos; se asignan o reparten mediante métodos (como el valor neto realizable o unidades físicas).

Pregunta 95

¿Qué instrumento de financiación ajena se caracteriza por ser "desintermediado" al no requerir la intervención directa de entidades financieras?

- A. Las obligaciones y bonos emitidos en mercados de deuda. ✓**
- B. El leasing financiero de maquinaria industrial.
- C. El descuento de efectos comerciales (letras y pagarés).
- D. El factoring con recurso para pymes.

Respuesta correcta: Opción A**Justificación:**

La respuesta correcta es la 'a'. Se consideran instrumentos desintermediados (o de "desintermediación financiera") porque la empresa acude directamente a los mercados de capitales para obtener fondos de los inversores (particulares o institucionales), sin que un banco actúe como prestamista intermedio. Aunque los bancos pueden intervenir como asesores o colocadores de la emisión, el riesgo del préstamo lo asume directamente quien compra el bono o la obligación, no la entidad financiera.

Pregunta 96

Desde el punto de vista del Derecho Administrativo y la privacidad, ¿cuál es el mayor riesgo legal al integrar datos físicos y digitales para una visión 360º del cliente?

A. La falta de consentimiento explícito (opt-in) para el tratamiento de datos personales cruzados entre diferentes plataformas y entornos. ✓

B. La imposibilidad de emitir facturas proforma en formato electrónico.

C. Que el servidor del CRM no esté ubicado físicamente en la misma provincia que el domicilio social de la empresa.

D. La obligación de publicar los datos de compra de todos los clientes en el Portal de Transparencia.

Respuesta correcta: Opción A

Justificación:

La respuesta correcta es la "a". El cruce de datos entre canales exige una base legal y un consentimiento informado muy estricto según el RGPD.

Pregunta 97

¿En qué consiste el derecho a la 'Desconexión Digital'?

A. En la prohibición de utilizar ordenadores portátiles fuera de la fábrica.

B. En el derecho a utilizar las redes sociales personales durante las horas de producción.

C. En la obligación de la empresa de cortar el suministro eléctrico los fines de semana.

D. En el derecho de los trabajadores a no responder comunicaciones de trabajo fuera de su jornada legal. ✓

Respuesta correcta: Opción D

Justificación:

La respuesta "d" es correcta. Busca proteger la salud mental y la conciliación ante la hiperconectividad tecnológica.

Pregunta 98

Dentro del modelo de Porter, ¿cuál de los siguientes factores incrementa significativamente el poder de negociación de los proveedores?

A. La existencia de productos sustitutivos bien posicionados para los insumos que suministran.

B. Que el sector al que venden represente una fracción muy pequeña de las ventas totales de los proveedores. ✓

C. La baja concentración del sector de los proveedores en comparación con el sector de los compradores.

D. La facilidad de los compradores para integrarse hacia atrás en la cadena de valor.

Respuesta correcta: Opción B

Justificación:

La respuesta b) Que el sector al que venden represente una fracción muy pequeña de las ventas totales de los proveedores. ¿Por qué es la correcta? Si el sector del comprador no es un cliente importante para el proveedor (es decir, supone una parte insignificante de sus ingresos), el proveedor no tiene incentivos para negociar o bajar precios. Al no depender de ese cliente para sobrevivir, el proveedor tiene la sartén por el mango y puede imponer sus condiciones con mayor libertad, incrementando así su poder de negociación.

Análisis de las opciones incorrectas (Factores que debilitan al proveedor):

a) La existencia de productos sustitutivos: Si el comprador puede sustituir fácilmente el insumo del proveedor por otro producto diferente, el poder del proveedor disminuye drásticamente, ya que el comprador tiene alternativas.

c) La baja concentración del sector de los proveedores: Si hay muchos proveedores pequeños y pocos compradores grandes, los proveedores compiten ferozmente entre sí y el poder pasa al comprador.

d) La facilidad de los compradores para integrarse hacia atrás: Si el comprador puede fabricar él mismo lo que antes le compraba al proveedor, el proveedor pierde su poder porque el comprador ya no le necesita de forma exclusiva.

Pregunta 99

¿A través de qué impuesto tributa el Empresario Individual por los rendimientos obtenidos de su actividad empresarial?

A. A través del Impuesto sobre Sociedades, al igual que las sociedades de capital

B. A través del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) como impuesto directo sobre sus beneficios

C. A través del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), integrándose los beneficios empresariales como renta personal ✓

D. A través del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) como único tributo aplicable

Respuesta correcta: Opción C

Justificación:

El Empresario Individual no tiene personalidad jurídica propia diferenciada de la de la persona física que ejerce la actividad, por lo que su fiscalidad se integra directamente en la del propio empresario. Los beneficios generados por la actividad empresarial se consideran renta personal y tributan a través del IRPF, debiendo presentar declaraciones trimestrales de dicho impuesto junto con las correspondientes de IVA. Si el volumen de beneficios es reducido, el tipo impositivo del IRPF puede resultar inferior al del Impuesto sobre Sociedades, lo que en determinados casos puede suponer una ventaja fiscal frente a las formas societarias.

Pregunta 100

¿Qué ocurrió con la figura de la Sociedad Limitada de Formación Sucesiva (SLFS) y la Sociedad Limitada Nueva Empresa (SLNE) tras la entrada en vigor de la Ley 18/2022?

- A. Ambas figuras fueron reforzadas y ampliadas para facilitar el emprendimiento.
- B. Fueron fusionadas en una nueva figura denominada Sociedad Limitada Emprendedora.
- C. Ambas figuras fueron eliminadas por haber quedado superadas por las mejoras introducidas en la constitución de la Sociedad Limitada ordinaria. ✓**
- D. Solo fue eliminada la SLNE, manteniéndose la SLFS con modificaciones.

Respuesta correcta: Opción C

Justificación:

La Ley 18/2022 eliminó tanto la Sociedad Limitada de Formación Sucesiva (SLFS) como la Sociedad Limitada Nueva Empresa (SLNE). La SLFS desapareció porque su razón de ser era permitir la constitución con capital inferior a 3.000 euros bajo ciertas restricciones, pero al reducirse el capital mínimo a 1 euro, dicha figura perdió toda utilidad. La SLNE fue suprimida porque quedó superada por otros mecanismos de agilización como el Documento Único Electrónico (DUE) y el sistema CIRCE, que permiten la constitución y puesta en marcha de sociedades mercantiles de forma telemática y más eficiente.